

**RECURSO DE APELACIÓN.**

**EXPEDIENTE:** TEEA-RAP-014/2021 y acumulados.

**PROMOVENTE:** C. Jennifer Kristel Parra Salas y otros.

**AUTORIDAD RESPONSABLE:** Consejo General del Instituto Estatal Electoral.

**MAGISTRADA PONENTE:** Claudia Eloisa Diaz de León González.

**SECRETARIO DE ESTUDIO<sup>1</sup>:** Néstor Enrique Rivera López.

Aguascalientes, Aguascalientes a veintinueve de abril de dos mil veintiuno.

**SENTENCIA DEFINITIVA**, mediante la cual se confirma las resoluciones CG-R-38/2021, CG-R-39/2021 y CG-R-40/2021, emitidas por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en las que se avaló el registro de las fórmulas de candidaturas a diputaciones en los distritos XI, XV, y XVII.

**GLOSARIO**

**Promoventes:** C. Aurora Vanegas Martínez, Pablo Israel Rodríguez Ramírez y Luz María Padilla de Luna.  
**IEE y/o Responsable:** Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes.  
**Secretario Ejecutivo:** Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral.  
**Tribunal Electoral:** Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes  
**CG:** Consejo General  
**TEPJF:** Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

1

1. **ANTECEDENTES<sup>2</sup>.** De las constancias de autos y de las afirmaciones realizadas por las partes, se advierten los siguientes hechos relevantes.

1.1. **Asignación de cargos legislativos:** Durante el Proceso Electoral 2017-2018, las y el CC. Patricia García García, Gladys Adriana Ramírez Aguilar y Luis Enrique García López, resultaron electos como diputados integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado.

Diputado	Distrito Electoral por el cual fue electo.
Patricia García García	XVII
Gladys Adriana Ramírez	XVIII
Luis Enrique García López	XIV

1.2. **Adecuación normativa:** El veintinueve de junio del dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial del Estado una reforma al artículo 156 A del Código Electoral, en la que se estableció expresamente que

<sup>1</sup> Encargado de despacho de la Secretaría de Estudio adscrito a la Ponencia I, del TEEA.

<sup>2</sup> Todas las fechas corresponden al dos mil veintiuno salvo precisión en lo contrario.



los diputados que pretendan su reelección, pueden contender por la misma o por diversa demarcación electoral para la cual fueron electos.

1.3. **Proceso Electoral 2020-2021:** El tres de noviembre de dos mil veinte, dio inicio el proceso electoral local para renovar los Ayuntamientos y las Diputaciones del Estado de Aguascalientes.

1.4. **Convenio de coalición.** El dos de enero, de manera conjunta el PAN y el PRD a través de sus dirigencias locales, solicitaron al IEE el registro del Convenio de Coalición denominado "POR AGUASCALIENTES."

1.5. **Periodo de precampañas:** Entre el dos y el treinta y uno de enero, tuvo lugar el periodo de precampaña para la elección de los cargos públicos que conformaran el H. Congreso del Estado de Aguascalientes.

1.6. **Aprobación de candidaturas:** El quince de marzo, se presentaron ante los respectivos Consejos Distritales Electorales las solicitudes de registro de candidaturas, de la Coalición "POR AGUASCALIENTES" por los principios de mayoría relativa, mismas que fueron aprobadas el treinta y uno de marzo, en sesiones extraordinarias especiales efectuadas por los Consejos Municipales y Distritales, quedando, para el caso que nos ocupa de la siguiente manera:

Candidata/ Candidato	Distrito Electoral a contender.
Patricia García García	XV
Gladys Adriana Ramírez	XI
Luis Enrique García López	XVII

1.7. **Recursos de inconformidad:** El cuatro de abril, fueron presentados ante los Consejos Distritales Electorales XI, XV y XVII, diversos recursos de inconformidad, en contra de las resoluciones emanadas del punto anterior, mismas que fueron identificadas con las claves CDE11-R-09/21, CDE15-R-11/21 y CDE17-R-11/21.

1.8. **Resoluciones del Consejo General:** El quince de abril, el Consejo General del IEE, emitió las resoluciones identificadas con las claves CG-R-38/21<sup>3</sup>, CG-R-39/21<sup>4</sup> y CG-R-40/21<sup>5</sup>, mediante las

<sup>3</sup> RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, RESPECTO AL RECURSO DE INCONFORMIDAD IEE/RI/003/2021 Y SU ACUMULADO IEE/RI/004/2021, PROMOVIDOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS REDES SOCIALES PROGRESISTAS Y MORENA, RESPECTIVAMENTE, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN IDENTIFICADA CON LA CLAVE CDE15-R-11/21, EMITIDA POR EL XV CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE AGUASCALIENTES.

<sup>4</sup> RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, RESPECTO AL RECURSO DE INCONFORMIDAD IEE/RI/005/2021 Y SUS ACUMULADOS IEE/RI/006/2021 E IEE/RI/007/2021, PROMOVIDOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA, MOVIMIENTO CIUDADANO Y REDES SOCIALES PROGRESISTAS, RESPECTIVAMENTE, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN IDENTIFICADA CON LA CLAVE CDE17-R-11/21, EMITIDA POR EL XVII CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE AGUASCALIENTES.

<sup>5</sup> RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, RESPECTO AL RECURSO DE INCONFORMIDAD IEE/RI/008/2021 Y ACUMULADO IEE/RI/009/2021, PROMOVIDOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA Y REDES SOCIALES PROGRESISTAS, RESPECTIVAMENTE, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN IDENTIFICADA CON LA CLAVE CDE11-R-09/21, EMITIDA POR EL XI CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE AGUASCALIENTES.



cuales, se confirmaron los registros de las fórmulas de diputaciones bajo el principio de mayoría relativa de la Coalición "POR AGUASCALIENTES" relativas a los Consejos Distritales Electorales XI, XV y XVII.

**1.9. Recursos de Apelación:** El diecinueve y veinte de abril, inconformes con las resoluciones precisadas en el numeral anterior, las y los promoventes interpusieron los recursos de apelación de mérito ante el Consejo General del IEE, mediante las cuales se tienen a las y el CC. Patricia García García, Gladys Adriana Ramírez Aguilar y Luis Enrique García López como candidatos a diputados para contender vía reelección en el actual proceso electoral.

Para mayor precisión se enlistan los recursos y promoventes:

Expediente	Promoviente	Ponencia
TEEA-RAP-014/2021	Jennifer Kristel Parra Salas	Magistrada Claudia Eloisa Díaz de León González
TEEA-RAP-015/2021	Pablo Israel Rodríguez Ramírez	Magistrada Laura Hortensia Llamas Hernández
TEEA-RAP-016/2021	Pablo Israel Rodríguez Ramírez	Magistrado Héctor Salvador Hernández Gallegos
TEEA-RAP-017/2021	Pablo Israel Rodríguez Ramírez	Magistrada Claudia Eloisa Díaz de León González
TEEA-RAP-018/2021	Aurora Vanegas Martínez	Magistrada Laura Hortensia Llamas Hernández
TEEA-RAP-019/2021	Aurora Vanegas Martínez	Magistrado Héctor Salvador Hernández Gallegos
TEEA-RAP-020/2021	Aurora Vanegas Martínez	Magistrada Claudia Eloisa Díaz de León González
TEEA-RAP-021/2021	Luz María Padilla de Luna	Magistrada Laura Hortensia Llamas Hernández
TEEA-RAP-022/2021	Aurora Vanegas Martínez	Magistrado Héctor Salvador Hernández Gallegos

**1.10. Trámite y turno.** El veinticuatro de abril, se recibieron la totalidad de las constancias que integran los recursos de mérito, y de inmediato, la Magistrada Presidenta ordenó integrar los expedientes y turnó los autos a su ponencia.

**1.11. Radicación, admisión y cierre de instrucción.** En su oportunidad, la Magistrada instructora, radico los expedientes, admitió, y declaró cerrada la instrucción y ordenó formular el proyecto de resolución.

## 2. CONSIDERANDOS.

**2.1 Competencia.** Con fundamento en lo establecido en el artículo 17, apartado B, quinceavo párrafo de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; en relación con los artículos 297, fracción II, 335, fracción II, 336 y 337 del Código Electoral; este Tribunal Electoral, ejerce jurisdicción, y es competente para conocer y resolver los presentes asuntos por tratarse de recursos de apelación promovidos para controvertir resoluciones dictadas por el CG.

**2.2. Procedencia.** Los asuntos en cuestión, cumplen con los requisitos de procedencia previstos en los artículos 302 párrafo primero y 307 del Código Electoral del estado, además de que no se actualiza

causal alguna de improcedencia prevista en el artículo 304 del citado ordenamiento, lo cual se atiende de manera previa y oficiosa al pronunciamiento del fondo del asunto.

2.3. **Forma.** Las demandas se presentaron por escrito ante la autoridad responsable, y en éstas se hizo constar nombres y firmas autógrafas de quienes promueven, sus domicilios para oír y recibir notificaciones, así como las personas autorizadas para ello; además, se identifican los actos impugnados y la autoridad responsable; se mencionan los hechos en que basan su impugnación, los agravios que, supuestamente, causan el acto controvertido, y los preceptos presuntamente violados.

2.4. **Oportunidad.** Se estima satisfecho este requisito, pues de las constancias que obran en autos, las actuaciones combatidas fueron emitidas el quince de abril, y los respectivos recursos se interpusieron el diecinueve del mismo mes, por lo que se acredita que los medios impugnativos se presentaron dentro del plazo legal previsto en el artículo 301 del Código Electoral del Estado.

2.5. **Legitimación y personería.** Los requisitos que nos ocupan se satisfacen, ya que quienes promueven, se ostentan como representantes de partidos políticos, como a continuación se precisa:

PROMOVENTE	CARÁCTER.
C. Luz María Padilla de Luna.	Representante Propietaria del partido Movimiento Ciudadano.
C. Pablo Israel Rodríguez Ramírez.	Representante Suplente del partido político Redes Sociales Progresistas.
C. Aurora Vanegas Martínez	Representante Propietaria del partido MORENA.

2.6. **Interés jurídico.** Se cumple con tal requisito, pues las partes actoras, en su calidad de representantes partidistas, combaten actuaciones emanadas por el CG.

En el caso, se cumple con el requisito porque la y los promoventes tiene un interés directo para cuestionar el registro de candidaturas para el mismo cargo. Ello, con independencia que les asista la razón o no, ya que debe garantizarse que en la contienda se observen los principios de constitucionalidad y equidad, lo cual se lograría si los candidatos cuestionados cumplen con los requisitos legales para ostentar la candidatura

De ahí que, la parte recurrente pretende que este Tribunal le restituya la posible vulneración al principio de equidad y constitucionalidad, este último principio en materia de elección.

2.7. **Definitividad.** Este requisito se encuentra colmado en los recursos objeto de resolución en este fallo, en los términos analizados anteriormente al estudiarse la procedencia de los mismos; además que, dentro del Código Electoral no se prevé medio de impugnación diverso por el que previamente se puedan combatir los actos que se impugnan.



3. **ACUMULACIÓN.** El Pleno de este Tribunal, observa que, en la especie, es procedente acumular los juicios TEEA-RAP-015/2021; TEEA-RAP-016/2021; TEEA-RAP-017/2021; TEEA-RAP-018/2021; TEEA-RAP-019/2021; TEEA-RAP-020/2021; TEEA-RAP-021/2021; TEEA-RAP-022/2021 al diverso TEEA-RAP-014/2021, debido a que éste fue el primero que se registró, por lo que debe agregarse una copia certificada de los puntos resolutive de esta ejecutoria a los autos del expediente acumulado, en atención a lo que disponen los artículos 257 del Código Electoral y 129 del Reglamento.

Lo anterior, debido a que se trata de Recursos de Apelación, en los que, si bien se impugnan diferentes resoluciones, la materia es la misma, la inaplicación del artículo 156 A, fracción V del Código Electoral.

Al respecto, debe señalarse que los efectos de la acumulación son meramente procesales y en modo alguno pueden modificar los derechos sustantivos de las partes que intervienen en los diversos juicios, sino que, las finalidades que se persiguen con ésta son única y exclusivamente la economía procesal y evitar sentencias contradictorias<sup>6</sup>.

4. **TERCEROS INTERESADOS.** De las constancias que obran en autos, se advierte la comparecencia de las y el CC. Patricia García García, Gladys Adriana Ramírez Aguilar y Luis Enrique García López, quienes, de igual manera, cumplen con los requisitos de procedencia, forma, oportunidad, así como legitimidad, personería e interés jurídico, pues comparecen en su carácter de diputados locales, y candidatos a una diputación por la vía de reelección.

Dichos comparecientes, esencialmente hacen valer la inaplicabilidad de criterios que invocan los promoventes, puesto que manifiestan que no son aplicables al caso concreto, dado que tratan temáticas distintas y únicamente pretenden confundir a esta autoridad jurisdiccional.

Además, aducen que es constitucionalmente válida la reelección por distrito distinto en Aguascalientes, ya que la normativa local así lo establece; y, robustecen su postura al señalar que el Estado de Aguascalientes y las demás entidades federativas son libres para crear mecanismos, arreglos y disposiciones novedosas que, mientras no contradigan o sean incompatibles con el contenido de la Constitución Federal, los derechos humanos y los criterios de esta Suprema Corte, pueden distinguirse –en todo o en parte– del régimen de gobierno que tienen otras entidades federativas y aún la Federación.

Apuntan, que la posibilidad de reelegirse por distrito diverso, de ninguna manera puede entenderse como contrario a la Constitución, en la medida que potencia los derechos político electorales y las posibilidades para ejercerlos, al permitirles participar con mayores posibilidades, lo que maximiza su derecho humano al voto pasivo, así como la posibilidad que la rendición de cuentas sea calificada por mayor parte del electorado.

<sup>6</sup> Jurisprudencia 2/2004. De Rubro ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS PRETENSIONES. Disponible para consulta en la URL: <https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/Tribunal-electoral/jurisprudencia-2-2004/>



Concluyen, estableciendo que no legislaron en su propio beneficio, y que no existe una violación a tal precepto, pues determinarlo así, sería como impedir cualquier reforma que beneficie al Estado de Aguascalientes, puesto que las y los legisladores serían beneficiados de la misma, como una consecuencia natural.

5. **ACTO COMBATIDO Y AGRAVIOS.** En cuanto a los agravios de quienes promueven, y a fin de señalar de manera general los argumentos que hacen valer, se hace una síntesis de los mismos, sin que ello constituya una transgresión a los principios de congruencia y exhaustividad, pues tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos sujetos a debate derivados de la demanda o del escrito de expresión de agravios, se estudian y se les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis.

Entonces, es importante retomar lo que ha determinado la Sala de la SCJN en cuanto a la transcripción de los mismos, jurisprudencia número 2ª./J.58/2010, de rubro: **CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN**<sup>7</sup>.

Cabe señalar que de conformidad con la jurisprudencia 3/2000, de rubro: "AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR<sup>8</sup>" así como la diversa de rubro: "DEMANDA. ESTUDIO INTEGRAL PARA DESENTRAÑAR LA CAUSA DE PEDIR<sup>9</sup>", todos los razonamientos y expresiones que aparezcan en las demandas, constituyen un principio de agravio, con independencia de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, por lo que basta que las partes actoras expresen con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que les causan las resoluciones impugnadas y los motivos que originaron los agravios, para que, con base en ello se pueda advertir de manera plena lo realmente planteado.

5.1. **Síntesis de los agravios.** Este Tribunal, en ejercicio de sus atribuciones, procede a analizar de manera íntegra los escritos de demanda, a efecto de identificar los agravios, con independencia de su ubicación; y se precisa, que dada la íntima vinculación que guardan entre sí las alegaciones expuestas por los promoventes, algunas serán analizadas en forma conjunta, sin que ello les genere perjuicio alguno<sup>10</sup>.

Además, se tiene en cuenta que para la expresión de la inconformidad no es necesario que se emplee una determinada fórmula o se siga un silogismo; para tener configurados los agravios, basta con que se

<sup>7</sup> Jurisprudencia 2a./J. 58/2010. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Consultable en la URL: <https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=164618&Semana=0>

<sup>8</sup> Visible a fojas 117 a 118, del Volumen 1, de la citada Compilación de Jurisprudencia y Tesis en la Materia.

<sup>9</sup> Consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXIII, abril de 2011, página 1299.

<sup>10</sup> Jurisprudencia del TEPJF de rubro 4/2000, AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.



señale claramente la causa de pedir, como se razona en la Jurisprudencia 2/98 de la Sala Superior, de rubro: "AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL".

Así, en acatamiento al principio de economía procesal, y por no constituir un deber jurídico a cargo de este Tribunal su inclusión en el texto del presente fallo, se estima innecesario transcribir los agravios de quienes impugnan<sup>11</sup>, sobre todo, cuando se tienen a la vista en el expediente para su debido estudio; no obstante, a fin de resolver con claridad el presente asunto, se realiza la síntesis correspondiente.

Del análisis integral de sendos escritos de demanda, este órgano jurisdiccional local advierte que, aunque las demandas se encaminan a controvertir resoluciones diversas emanadas del CG, las cuales confirman candidaturas a diputaciones por el principio de MR por la vía de la reelección, que fueron aprobadas por diferentes Consejos Distritales, -organismos electorales independientes- plasman agravios y argumentos idénticos en sus escritos, por lo cual, éstos se expondrán sin distinción, y se estudiarán en conjunto, puesto que todas se fundamentan en el mismo precepto legal, y sobre él gravitan sus agravios



• Manifiestan que al emitir las resoluciones *CG-R-38/21*, *CG-R-39/21* Y *CG-R-40/2021*, el IEE omitió salvaguardar el contenido constitucional de lo establecido dentro del artículo 116, fracción II, párrafo segundo de la CPEUM, en consideración a que la SCJN, la Sala Superior del TEPJF y las Salas Regionales de Monterrey y Xalapa se han manifestado al respecto.

Hacen el señalamiento que el CG de manera equivocada ha intentado sostener la legalidad de su resolución al amparo de la libertad configurativa de los Estados porque, a dicho de los promoventes, esta posibilidad de que los legisladores de mayoría relativa puedan optar por buscar la reelección por circunscripciones territoriales distintas a aquéllas por las que originalmente fueron electos ya que escapa a la misma.

- Que se debe determinar la revocación de la resolución impugnada y que en consecuencia se debe dejar sin efectos el registro distrital de las candidaturas controvertidas.
- Sostienen, que el IEE fue omiso en advertir que, la territorialidad en la reelección legislativa al ser un elemento relevante al momento de valorar su legitimidad constitucional, a criterio de los promoventes, se traduce en un fraude a la ley.
- Así mismo, se duelen de que, en su calidad de diputados, los ahora candidatos hayan legislado en su propio beneficio lo contenido en el artículo 156 A, fracción V del Código Electoral, en razón a que los ahora demandados formaron parte de la legislatura estatal responsable del contenido del artículo en cuestión, solicitando así la inaplicación del artículo referido.

<sup>11</sup> Al respecto, es orientadora la jurisprudencia 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer".

- Una de las promoventes se duele de una transgresión a su esfera jurídica en relación una ilegal actuación del IEE -sin exponer el acto concreto en cuestión- en razón a que avaló de manera indebida la candidatura de la C. Gladys Adriana Ramírez Aguilar.

5.2. **Precisión de los actos impugnados.** De los escritos de demanda, es posible advertir que los promoventes se inconforman de las resoluciones CG-R-38/21, CG-R-39/21 y CG-R-40/21, en donde la responsable confirmó los registros siguientes:

Fórmulas de Candidaturas	Resolución impugnada	Distrito Electoral a contender.
Patricia García García. Propietaria. <i>Laura De La Cruz López. Suplente.</i>	CG-R-38/21	XV
Luis Enrique García López. Propietario. <i>Francisco Sánchez Esparza. Suplente.</i>	CG-R-39/21	XVII
Gladys Adriana Ramírez. Propietaria. <i>Ma. Isabel Rosales Chávez. Suplente.</i>	CG-R-40/21	XI

En ese entendimiento, esta autoridad jurisdiccional considera que la litis se centra en determinar si los registros aprobados en las resoluciones impugnadas, fueron conforme a derecho. Lo anterior, en virtud de que tales registros se realizaron por *vía de reelección por distrito diverso* al que fueron electos en el proceso comicial inmediato anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 A fracción V, del Código Electoral.

6. **CUESTIÓN A RESOLVER.** Por lo anterior, la cuestión a resolver en el presente asunto es determinar si la forma de modular la reelección, es acorde y permisible dentro de la libertad configurativa del Estado.

Es decir, si es posible que la normativa local, permita contender por otro distrito al que fueron electos, dada la naturaleza territorial de la reelección, o bien, si al aplicarse desvirtúe o contraríe los fines y límites de la reelección legislativa.

En esa lógica, se resolverá si la reelección por distrito diverso garantiza el cumplimiento de la rendición de cuentas, o bien, si es posible evaluar el desempeño de un diputado que va en reelección por un distrito diferente.

6.1. **MARCO JURÍDICO.** La elección consecutiva o reelección en México ha tenido una evolución y lógica especial, basada en las decisiones políticas fundamentales establecidas en la Constitución, que han definido las características propias de nuestro sistema jurídico y su diferencia de otros ordenamientos jurídicos, al grado, incluso, de establecer reservas en diversos instrumentos internacionales, para garantizar la efectividad de dichas decisiones.



Esto es, que el sistema de límites a la reelección o a la elección consecutiva, en la actualidad, en cierta medida, ha sido flexibilizado bajo un sistema de excepciones a dichas restricciones, para que las personas que son electas y acceden al ejercicio de determinados cargos, puedan volver a participar o a ser electos de manera consecutiva o en reelección, siempre que cumplan con ciertas condiciones, conforme a lo siguiente.

- **RÉGIMEN VIGENTE DE LA REELECCIÓN A NIVEL CONSTITUCIONAL.** Mediante la reforma a la Constitución General en materia político-electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, se eliminó del sistema normativo mexicano la prohibición de elección consecutiva o reelección de quienes ocupan los cargos legislativos —a nivel federal y local—, habilitándose en los artículos 54, 116 fracción II, párrafo segundo, y al 115 base I, párrafo segundo, para los miembros de los ayuntamientos.

En términos generales, la reelección supone la posibilidad jurídica de que, quien se encuentre desempeñando algún cargo de elección popular, y pretenda mantenerse en el mismo, tenga la posibilidad de participar en la elección correspondiente de forma consecutiva, en la medida que cumpla con las condiciones y requisitos previstos para su ejercicio.

Por otro lado, la CPEUM, la Constitución Federal, consagra:

*"Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental."*

*"Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.*

*"Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:*

I. [...]

*Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato."*

*"Artículo 116.- El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.*

*Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:*

I. (...)  
II. (...)





TRIBUNAL ELECTORAL  
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

*Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.*

*Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes. (...)*

De lo anterior, tenemos que la reelección es introducida para determinados cargos, tanto a nivel federal como local, y según el régimen federal y de distribución de competencias, en armonía con los artículos constitucionales transcritos, para el caso que nos ocupa, se entiende como un elemento a sumarse y combinar con el conjunto de derechos y principios que rigen al sistema democrático, donde en el diseño que cada Estado determina para conformar su Poder Legislativo, debe imprimirse la representación popular.

En esa tesitura, tenemos que la Constitución General, prevé dos reglas generales:

- a) Que sea por el mismo cargo hasta por cuatro ocasiones consecutivas; y
- b) La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Entonces, encontramos que la reelección surge como un derecho de los electores de ratificar o rechazar el trabajo de quienes aspiren a reelegirse, situación que, en términos generales, se debe entenderse desde la lógica de la rendición de cuentas y del ejercicio del voto informado.

Es decir, se reinserta en el orden constitucional, como una autorización excepcional a la limitante general de reelección, para garantizar la dimensión colectiva del derecho a votar, como un derecho de la ciudadanía, en tanto que son las y los ciudadanos quienes tienen, en primer término, el derecho de decidir sobre la permanencia de sus gobernantes y, en el caso, sobre reelegirlos o no.

Como consecuencia, se ha entendido por los Altos Tribunales, que la reelección surge como una autorización excepcional a la limitante general de reelección, para garantizar la dimensión colectiva del derecho a votar, como un derecho de la ciudadanía, en tanto que son las y los ciudadanos quienes tienen, en primer término, el derecho de decidir sobre la permanencia de sus gobernantes y, en el caso, sobre reelegirlos o no.

## 7. ESTUDIO DE FONDO.

7.1. METODOLOGÍA. Por lo anterior, el estudio de lo que aquí se resuelve, -por cuestión de método-, se abordará en tres apartados, los cuales abarcarán el estudio de todos los planteamientos de los actores. En el primero, se estudiará si la regulación de la reelección, está dentro del ámbito de configuración estatal o si existe una reserva legal.



10.

TRIBUNAL ELECTORAL  
DEL ESTADO



Luego, en caso de determinarse que corresponde al legislador local, entonces se atenderá la viabilidad de la solicitud de inaplicación de la norma desde la perspectiva que se plantea en los recursos de apelación, analizando la regularidad constitucional y confrontando la norma local con la Constitución Federal.

Por último, se atenderán los agravios relativos a la participación de los candidatos impugnados en su calidad de legisladores en la aprobación de la reforma de fecha veintinueve de junio de dos mil veinte, en la que se contenía, entre otros, la del artículo 156 A fracción V.

## 7.2. LIBERTAD CONFIGURATIVA.

a. Los Estados gozan de libertad configurativa para regular la reelección de las diputaciones. Los actores, dicen que la aplicación del artículo 156 A fracción V del Código Electoral del Estado, escapa de la libertad configurativa de los Estados, ya que no puede llegar al extremo de negar la teleología y la racionalidad de su base constitucional, porque negaría la supremacía constitucional que la sustenta.

Invoca como aplicables, las siguientes jurisprudencias: LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA DE LOS CONGRESOS ESTATALES. ESTÁ LIMITADA POR LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES Y LOS DERECHOS HUMANOS<sup>12</sup>, y la jurisprudencia 5/2016 del TEPJF de rubro: LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA ELECTORAL. DEBE RESPETAR EL DERECHO A LA IGUALDAD.<sup>13</sup>

Básicamente, sostiene que en la Constitución Federal se plasman las limitantes a este derecho, y que de ellas, se desprende una regla implícita, -cuyo contenido manifiesta el constituyente permanente-, al momento de exponer los alcances de la reforma al artículo 54 de la Constitución Federal, y que estos, trascienden al plano constitucional y se constituyen en una directriz, que en el caso concreto es contrariada por la norma local, en cuanto al ámbito territorial en función de la rendición de cuentas y el derecho a la información.

Sostienen, que la libertad configurativa debe entenderse limitada por los mandatos y por la teleología axiológica contenidos dentro de las constituciones, y que debe respetarse, situación que, a su juicio, no acontece en el particular.

En ese sentido, este Tribunal advierte que son **inoperantes** los agravios, porque los actores pretenden que, a partir de un concepto, *aunque correcto*, se califique como errónea la norma en la que la responsable fundamentó sus resoluciones en donde confirmó los registros impugnados, sin que su argumentación demuestre en qué parte del sistema normativo se encuentran las limitantes que, a su juicio, fueron rebasadas por el legislador local. Lo anterior, como se explicará a continuación.

Los actores proponen como antecedente para resolver este caso lo resuelto por la SCJN, en la Acción de Inconstitucionalidad 88/2015, 93/2015 y 95/2015, sin embargo, es de resaltar que en tal resolución

<sup>12</sup> Consultable en la URL: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2012593>

<sup>13</sup> <https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=5/2016&tpoBusqueda=S&sWord=jurisprudencia,5/2016>

se reconoce que la regulación pormenorizada de la reelección está en el campo de la libertad de configuración legislativa de que gozan los Estados, cuya única limitación impuesta por el Poder Reformador, radica en que la postulación a diputados locales sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Así, se comparte con los actores lo que exponen en torno a la libertad configurativa de los Estados y sus limitantes, sin embargo, no expresan de qué forma, o de dónde se desprende que la Constitución, establece como materia reservada para el Congreso de la Unión, o bien, por qué considera que el modelo que introduce la reelección en el artículo 116 fracción II, párrafo segundo, no es un marco, sino que, debe tenerse como absoluto, y por tanto, que ha sido rebasado por el legislador local.

Ahora bien, en la Acción de Inconstitucionalidad 76/2016 y sus acumuladas, se refiere que los artículos 115 y 116 constitucionales establecen las bases a las que deben sujetarse las legislaturas locales para regular la elección de gobernadores, miembros de las legislaturas locales e integración de los ayuntamientos en atención al principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133.

En ese sentido, la libertad de configuración normativa de las legislaturas locales es mayor en la medida en que la Constitución solo establezcan las bases mínimas para su elección, mas no los requisitos y calidades que se deben cubrir.

También en la misma Acción de Inconstitucionalidad, el pleno de la SCJN, sostuvo que las entidades federativas están obligadas a introducir en sus ordenamientos constitucionales la elección consecutiva de los diputados de sus legislaturas; sin embargo, se les otorgó libertad configurativa para establecer la regulación pormenorizada de esa posibilidad de reelección, respetando las limitantes señaladas en párrafos anteriores.

En este contexto, es acertado considerar que el legislador local puede establecer en la normativa respectiva la reelección, en el ejercicio de sus facultades reglamentarias en esta materia, siempre y cuando guarden una lógica razonable, a fin de no hacer nugatorio el derecho fundamental de que se trata o restringirlo en forma desmedida.

Lo anterior, el entendido que la libertad configurativa de las entidades federativas significa, que los Estados tomen las decisiones que mejor consideren para organizar su régimen interno de gobierno, ajustándose a las reglas y principios infranqueables de la Constitución Federal.

Esto posibilita que los Estados organicen su régimen interno, tutelen los derechos y libertades de sus habitantes y enfrentan así los retos específicos de su contexto social, cultural y político, siempre y cuando ese diseño institucional local no acarree, por sí mismo, la vulneración de un derecho fundamental o principio constitucional. Así, cada entidad federativa puede innovar y distinguirse tanto del régimen de



gobierno que tienen las demás como del de la Federación. Ninguna de estas limitantes a la libertad configurativa de las entidades federativas se actualiza en el presente caso<sup>14</sup>.

Esta conclusión, es acorde a lo resuelto en la Controversia Constitucional 32/2005 en el sentido de que *"la interpretación armónica de los artículos 124, 40 y 41 constitucionales lleva a concluir, que las entidades federativas tendrán plena autonomía para que, sin transgredir los principios establecidos en la Constitución, resuelvan con libertad en las materias que la propia Norma Fundamental les ha reservado competencia, al no señalarlas de manera expresa en la competencia de la Federación"*.

De esta manera, encontramos que el mismo criterio se ha seguido en las sentencias que menciona como antecedentes, puesto que, de su estudio, se desprende que se refieren justamente a determinar si la forma en que los Estados han regulado la reelección, constituye limitantes al derecho de reelección.

Cabe apuntar que, al decidir el Constituyente Permanente que México sería un estado federal, dio cabida y respeto a la diversidad regional, cultural, política y social del país, por ello, el orden jurídico que se establece en cada entidad federativa, salvaguarda de los derechos y libertades de sus habitantes y siguiendo la tradición moderna, en ellas se manifiesta el pacto social de cada entidad, que garantiza el imperio del derecho sobre la ley del más fuerte, así se entienden como expresiones de la soberanía de la Nación que reside en el pueblo y que cada entidad federativa decide consagrar.<sup>15</sup>

Por lo anterior, se concluye que el H. Congreso del Estado de Aguascalientes en ejercicio de su libertad auto configurativa articuló la reelección y que, contrario a lo que sostienen los accionantes, al no contrariar ningún imperativo impuesto por el artículo 116 fracción II párrafo segundo, ésta es una posibilidad que se encuentra dentro de su ámbito de competencia.

Ahora bien, una vez que se ha concluido que la modulación de la reelección de los diputados a nivel local, es libertad residual competencia de los Estados, la normativa será analizada a partir de estos parámetros constitucionales, para determinar su regularidad en cuanto a si la modulación específica del artículo 156 A fracción V del Código Electoral, rebasa los parámetros constitucionales.

### 7.3. CONTRAVENCIÓN A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 116 FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

A. SOLICITUD DE INAPLICACIÓN DE LA NORMA. Los actores, sostienen que la regulación en materia de reelección contenida en el artículo 156 A fracción V del Código Electoral, en el que se sustentan los registros de los candidatos impugnados, es contraria a la Constitución, porque excede y contraría tanto la finalidad de la reelección, como los límites que la propia ley suprema impone a su ejercicio, de ahí que soliciten que dicho artículo sea inaplicado al caso concreto.

<sup>14</sup> SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 15/2017 y sus Acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017, publicada en el DOF el 25 de abril de 2019

<sup>15</sup> Véase la sentencia de la controversia constitucional 21/97

i. Cuestión Preliminar. Para justificar la aplicación de un acto concreto.

Este Tribunal considera que de acuerdo a la Tesis IV/2014<sup>16</sup> emitida por Sala Superior, y a los criterios sostenidos por la Suprema Corte, los órganos jurisdiccionales locales, tienen la posibilidad de realizar análisis para determinar la posible inconstitucionalidad de la norma, siempre y cuando la disposición normativa se encuentre dentro de su competencia, es decir que se trate de una ley local, o un reglamento de la materia.

Asimismo, la segunda condición que refieren tales criterios es la existencia de un acto concreto de aplicación, lo que significa que no puede inaplicarse una norma en lo general, pues esto último es facultad exclusiva de la SCJN.

Entonces, en el caso, si se cumplen con ambas condiciones, al tratarse del análisis de constitucionalidad de una norma contenida en el Código Electoral Local y a su vez el acto de aplicación se cumple por el hecho de que el artículo cuestionado ha sido aplicado por la autoridad responsable en las resoluciones que ahora se combaten y que a su vez confirman los registros de las candidaturas a diputaciones por reelección por un distrito diverso al que fueron electos.

ii. Preámbulo de la interpretación conforme.

Control de Constitucionalidad. Para determinar si esa modulación introducida por el legislador local, es contraria al ejercicio de derechos humanos y, por tanto, si transgrede o no la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales en la materia, deben estarse a lo siguiente:

Todas las autoridades jurisdiccionales locales se encuentran facultadas para realizar control, sea concentrado o difuso, que lleve a la inaplicación de algún precepto normativo, tal como se señala en la tesis P. LXIX/2011 aprobada por el Pleno de la SCJN, de rubro: "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS".

En este tenor, la SCJN, ha establecido una serie de pasos a seguir en el ejercicio del control de constitucionalidad y de convencionalidad, señalando al efecto lo siguiente:

- a) Interpretación conforme en sentido amplio. Consistente en que todos los jueces y autoridades deben interpretar el orden jurídico conforme con los derechos humanos, reconocidos en la

<sup>16</sup> Tesis IV/2014

ÓRGANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES LOCALES. PUEDEN INAPLICAR NORMAS JURÍDICAS ESTATALES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A TRATADOS INTERNACIONALES.- De la interpretación sistemática de los artículos 1° y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubros: SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO y PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, se advierte que todas las autoridades jurisdiccionales del país, pueden realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad de las normas jurídicas, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos. En consecuencia, los tribunales electorales locales tienen facultades para analizar las normas jurídicas estatales, contrastarlas con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y después de realizar un ejercicio de interpretación conforme, en su caso, inaplicarlas en un asunto en concreto cuando sean contrarias a la norma fundamental, toda vez que cuenta con atribuciones para restituir el orden jurídico vulnerado mediante el dictado de una sentencia.



Constitución y en los tratados internacionales en los cuales México sea parte, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a favor de las personas (*principio pro persona*);

- b) Interpretación conforme en sentido estricto. Significa que cuando haya dos o más interpretaciones posibles, se opte por aquella que sea acorde con los derechos humanos.
- c) Inaplicación de la ley. Solamente cuando las alternativas anteriores no sean posibles o no den pie a salvar el sentido de la norma y su presunción de constitucionalidad, es viable desaplicar la ley impugnada al caso concreto.

De esta forma, el control difuso de constitucionalidad, no consiste en dejar de aplicar la norma por ser contraria al parámetro de constitucionalidad, sino que implica, *en primer término*, tratar de armonizar la norma local con la nacional y convencional; sus protocolos y la jurisprudencia convencional (como estándar mínimo), y de ahí desechar aquellas interpretaciones que resulten contrarias o incompatibles al parámetro constitucional.

Ahora bien, en lo concerniente al mandato de la interpretación conforme y la que resulte más protectora (*principio pro persona*), cabe señalar lo siguiente:

La interpretación conforme, es un principio por el cual, las normas relativas a derechos humanos son, en su carácter de estándares de mínimos, objeto de remisión hacia la Constitución y los tratados internacionales para efectos de su aplicación más protectora, constituyéndose como elementos normativos susceptibles de ampliación, debido a que los principios de progresividad o *pro persona*, inherentes a la interpretación, son susceptibles de potenciarse a partir de la interpretación.

iii. **Facultad de este Tribunal para realizar el control de constitucionalidad.** Para estar en aptitud de realizar el control difuso de la constitucionalidad, debe cumplirse con una serie de requisitos formales y materiales, de admisibilidad y procedencia, los cuales se cumplen en este caso como se verá a continuación:

a) Que el juzgador tenga competencia legal para resolver el procedimiento o proceso en el que vaya a contrastar una norma. Este requisito se cumple porque este Tribunal es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en el Estado y, en el caso, el artículo que sirvió de soporte para confirmar los registros de los candidatos impugnados que pretenden su reelección, son de naturaleza electoral.

b) Que se proporcionen los elementos mínimos, es decir, debe señalarse con toda claridad cuál es el derecho humano o garantía que se estima infringido, la norma general a contrastar y el agravio que le produce. Este requisito se cumple, porque el promovente manifiesta que la aplicación del artículo 156 A, fracción V, que establece que los diputados que pretendan su reelección, pueden contender por la misma, o por diversa demarcación electoral en la cual los eligieron en la elección inmediata anterior; es

contraria a la Constitución General por impedir la rendición de cuentas y el correcto ejercicio de la figura de la reelección.

c) Debe existir aplicación expresa o implícita de la norma. Se cumple el requisito, dado que las resoluciones impugnadas consisten en un acto de aplicación e interpretación de la norma en cuestión.

d) La existencia de un perjuicio. Se acredita porque de resultar fundada su pretensión, la aplicación de la porción normativa en comento, puede generarles afectación, a una de las actoras en su calidad de candidata por uno de los distritos donde se impugna una de las postulaciones, y a los partidos políticos inconformes, como garantes de la legalidad y constitucionalidad de los actos y resoluciones que emita el Consejo General.

e) Inexistencia de cosa juzgada respecto del tema en el juicio. No existe cosa juzgada en este asunto que impida realizar el control del acto, o que haya resuelto el tema de fondo.

Por lo tanto, en el presente asunto, se surten los supuestos formales y materiales para que este Tribunal Electoral esté en condiciones para realizar un ejercicio de control de constitucionalidad concreto.

En el caso, los actores estiman inconstitucional el artículo 156 A en su fracción V del Código Electoral, porque excede los parámetros intrínsecos de la reelección, estiman que lo previsto en la norma en la cual se apoya la determinación del CG que aprobó los registros de los candidatos denunciados, que les permite contender por distrito diverso al de origen, es inconstitucional e inconveniente porque se trata de una deformación del derecho a voto activo y que la Constitución implícitamente ordena que sea por el mismo distrito.

Atento a lo anterior, se procede a realizar el análisis de la norma tildada de inconstitucional para determinar si es posible ubicarla en alguno de los escenarios previamente indicados.

El artículo cuestionado reza:

*"ARTÍCULO 156 A.- Pueden optar por la reelección consecutiva los servidores públicos propietarios o suplentes de elección popular, que hayan ocupado el cargo, de conformidad con lo siguiente:*

*[...]*

*V.- Los diputados que pretendan su reelección, pueden contender por la misma o por diversa demarcación electoral por la cual fueron electos;*

*[...]"*

De tal suerte, como se sostuvo en el marco normativo de referencia, la reelección si bien es una modalidad del derecho al voto y una vía de postulación, concreta una posibilidad de perfeccionamiento del derecho a votar, abordado desde su integralidad, (votar y ser votado) por lo cual, su análisis debe atender, tal como lo sostienen los actores, a la corresponsabilidad de la norma sometida a estudio con la naturaleza de la reelección, su finalidad y sus beneficios.



Una vez que se ha determinado que el modo de instrumentar la reelección, está dentro de la libertad configurativa estatal, debe estudiarse el cómo fue regulado, y cuál es su impacto directo en el derecho al voto en su doble dimensión, porque, como tal, debe atender a criterios de proporcionalidad y razonabilidad.

Como ya se dijo en el apartado anterior, cada Estado, en su soberanía, puede regular su vida interna e idear e innovar los mecanismos legales que estime necesarios, que se adecúen a su realidad y respondan de la mejor manera a sus necesidades y proyectos.

Así, es inconcuso que lo que debe resultar de este análisis es si la norma local, es consistente con los parámetros constitucionales impuestos para la reelección, y a partir de lo que resulte, determinar si procede, o no, su inaplicación al caso concreto.

**B. INTERPRETACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN.** Quienes promueven recriminan, que el CG, no actuó conforme a lo ordenado por el artículo 1º Constitucional, y aplicaron un artículo que contraviene lo que a interpretación directa de la misma han establecido sobre los límites a la reelección, tanto la SCJN, como el TEPJF, en su Sala Superior, y Regionales Monterrey y Xalapa.

Señalan que, en tales precedentes, es tema ya estudiado, analizado y refrendado por estos Altos tribunales, respecto de las postulaciones de diputados por el principio de mayoría relativa que pretendan su reelección, deben hacerlo por el mismo distrito por el que obtuvieron el triunfo en la elección inmediata anterior, de tal suerte, que es inconstitucional el artículo que permite competir de forma consecutiva por mayoría relativa en un distrito distinto al de origen.

Sostiene la inconstitucionalidad del artículo referido, sobre dos bases fundamentales:

- *“La libertad configurativa de las entidades debe siempre entenderse limitada por los mandatos y por la teleología axiológica contenidos dentro de la Constitución.”*
- *“La elección consecutiva debe ser configurada de forma tal que se garantice siempre el cumplimiento de la finalidad constitucional de rendición de cuentas que en ella está implícita.”*

**C. LOS PRECEDENTES INVOCADOS NO SON APLICABLES AL CASO CONCRETO.** Los accionantes, aprecian que en las siguientes sentencias se contiene una línea interpretativa y jurisprudencial que limita las postulaciones por mayoría relativa al mismo distrito electoral, y que, en consecuencia, demuestran el despropósito del artículo 156 A fracción V del Código Electoral.

Este Tribunal considera que los precedentes que invocan los actores no son aplicables para el caso concreto, ya que no contienen una interpretación directa de la Constitución federal que resulte aplicable al caso concreto, ni con ellos se demuestra la inconstitucionalidad de la norma local, como se verá a continuación:

- **ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 88/2015 Y SUS ACUMULADAS 93/2015 Y 95/2015.** En esta sentencia, se analiza la constitucionalidad del artículo 202 del Código de Instituciones y



Procesos Electorales del Estado de Puebla, que introduce específicamente que, en materia de reelección, debe postularse por el mismo distrito al de origen, cuando se trata de diputados que vía uninominal consiguieron el triunfo en la elección anterior.

No se considera aplicable al caso concreto porque a criterio de este Tribunal, el estudio gravitó sobre el análisis de esa norma en cuanto a restricción al derecho al voto.

La Corte, entiende la construcción de esta norma como una "condicionante que el legislador local introdujo con base en su libertad de configuración legislativa" que corresponde a una condición amparada por la libertad de configuración. Tal conclusión, no puede tomarse como una interpretación directa de la Constitución.

Cabe resaltar, que la opinión que la Sala Superior rindió para esta acción de inconstitucionalidad, dice que el requisito para que los diputados que busquen la reelección, consistente en que sólo puedan ser postulados en el mismo distrito electoral, no vulnera el derecho a ser votado, dado que con la reelección es posible premiar o castigar a un legislador mediante el sufragio, máxime si se tiene en consideración que si la elección consecutiva se da en el mismo distrito electoral o en alguno del mismo municipio o delegación, garantiza la posibilidad de evaluar la gestión de los servidores públicos para efecto de la reelección o no.

En consecuencia, se tiene como una condición impuesta por el legislador local en ejercicio de su libertad configurativa, por lo tanto, la territorialidad, no es una interpretación directa de la Constitución.

No puede pasar por alto, que incluso, se reconoce que mientras sea posible evaluar la gestión del representante, la postulación puede ser por distrito diverso.

- SUP-JDC-10257/2020. Para la elección federal 2020-2021, a falta de legislación secundaria, se instrumentó la reelección legislativa vía lineamientos expedidos por el INE, los cuales, en su articulado fijaron que para los que optaran por la elección consecutiva por mayoría relativa, solo pueden hacerlo por su distrito de origen, y los de representación proporcional por su misma circunscripción.

El tema de análisis fue si el INE estaba excediendo sus facultades por ser un órgano administrativo, y vía lineamientos, imponía un requisito no expreso en la Constitución Federal que limitaba un derecho de postulación por distrito diverso.

Que tal restricción, al constituir una limitante, debía estar expresamente señalado en la norma suprema, porque al no estar regulada por el legislador, implicaba una restricción al derecho de reelección.

A lo anterior, la Sala Superior, señala que no se puede hablar de una extralimitación, puesto que no había una reserva legal para que el Congreso de la Unión fuera el único facultado para instrumentar la reelección legislativa, por lo tanto, los lineamientos encuadraban en las competencias de ese órgano administrativo.



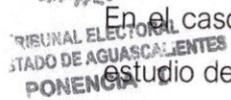
De lo anterior, se tiene que: no existe reserva legal, a nivel federal todavía no existe legislación que module este derecho, y fue válido que el INE introdujera la limitante territorial para la reelección, desde la perspectiva también de que exigir que sea por el distrito o circunscripción de origen, no implica una restricción a ningún derecho -en igual sentido a lo resuelto en la Acción de Inconstitucionalidad 88/2015 y acumuladas-.

Por lo tanto, tampoco es un antecedente aplicable al caso, ni en tal sentencia se revela una interpretación directa de la Constitución que avale sus argumentos para el caso que en esta sentencia se estudia.

En todo caso, lo que aplica es lo que dicta este antecedente donde dice: *“En ese sentido, el derecho a ser votado no es un derecho absoluto. Dicho derecho implica dos dimensiones, una individual y una social a partir de la existencia de un vínculo necesario entre representantes y representados, y que la naturaleza jurídica de la reelección, o elección consecutiva, supone, salvo previsión expresa en contrario, una condición implícita que se traduce en la posibilidad de limitar la reelección al mismo ámbito territorial, distrito o circunscripción, sin que ello, por sí mismo, implique una vulneración al derecho a ser votado.”*



• **SX-JRC-13/2019 Y ACUMULADOS.** Al igual que en la sentencia anterior, este asunto radica sobre el estudio de los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones dictados por el Instituto Estatal Electoral de Quintana Roo.



En el caso concreto, se revocan los lineamientos, porque de su estudio se concluyó, partiendo del estudio de su legislación local, que con ellos no era posible la finalidad de la reelección consistente en que los ciudadanos puedan premiar o castigar el desempeño de sus representantes mediante el voto. (postura que precisamente se plantea en este asunto).

Este antecedente no es aplicable, porque su enfoque es distinto. En este asunto se parte de una norma local que permite la postulación por distrito diverso<sup>17</sup>, que tendrá que confrontarse precisamente con la posibilidad de premiar o castigar el desempeño de los representantes mediante el voto.

Así, se analizará si la norma para el caso concreto cumple con las finalidades de la reelección en el Estado de Aguascalientes, no se opone a lo dispuesto en la Ley Fundamental, sea razonables y no vulnere el contenido esencial del derecho al voto.

• **SUP-REC-59/2019.** Esta resolución confirma la sentencia SX-JRC-13/2019, sobre la base de que la reelección es un mecanismo que refuerza a la democracia y como tal, implica dos dimensiones, una individual y una social a partir de la existencia de un vínculo necesario entre representantes y representados, y que, en esa medida, la restricción de contender por un mismo distrito para el caso de MR no implica una restricción a ningún derecho.

<sup>17</sup> Considérese que en el SUP-REC-59/2019, habla de la territorialidad salvo previsión expresa en contrario.



TRIBUNAL ELECTORAL  
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Sin embargo, en cuanto a la finalidad de la reelección, sostiene que *“con la reelección es posible premiar o castigar a un legislador mediante el sufragio, máxime si se tiene en consideración que si la elección consecutiva se da en el mismo distrito electoral o en algún distrito del mismo municipio [...], está garantizada la posibilidad de evaluar la gestión de los servidores públicos para efecto de la reelección o no, para de ahí ratificar o no al legislador.”*<sup>18</sup>

- SM-JDC-187/2021. La litis resuelta en este asunto, tampoco es aplicable al caso concreto, ya que se trata de la negativa de registro como candidata de una ciudadana que funge como suplente en la actual legislatura -del Estado de Nuevo León-, sobre la base de que, en la elección inmediata anterior, formó parte de la fórmula por una diputación por mayoría relativa por un distrito diverso, por lo tanto, al no haber asumido el cargo, la Sala Monterrey ordenó su registro.

Además, las reglas de postulación en ese Estado, se aplicaron los *Lineamientos sobre elección consecutiva de diputaciones por ambos principios para el Proceso Electoral Federal 2020-2021*, expedidos por el INE en fecha 20 de diciembre de 2020<sup>19</sup>.

- SM-JRC-16/2021. Este asunto tampoco es aplicable porque estudia la posibilidad de reelección de un diputado que en la elección anterior contendió por un distrito de mayoría relativa diferente al de su registro actual, sobre la base de que este diputado, accedió al congreso por la vía de representación proporcional, bajo el sistema de mejor segundo lugar, por lo tanto, la limitante territorial no le era aplicable.

- SM-JRC-21/2021. El asunto, parte nuevamente de premisas distintas. La litis que se resuelve deriva de si son válidos los registros de una diputada que vía reelección contiene, tanto por mayoría relativa, como por representación proporcional. El Tribunal local de Nuevo León, validó los registros, sobre la base de que no se trataba de una reelección, sino de una elección consecutiva, y que, por lo tanto, no le eran aplicables los lineamientos vigentes.

El problema central torna en que la diputada se inscribió en el distrito 03 del Estado de Nuevo León, siendo que en el proceso electoral anterior se postuló por distrito diverso.

Entonces, de acuerdo a los lineamientos que privan en esa entidad para la reelección, se consideró que su registro por distrito diverso era contrario a los mismos, sin embargo, que podía subsistir su candidatura por la vía de representación proporcional.

En este caso, al igual que en el anterior, los criterios de reelección son los Lineamientos expedidos por el INE, además de que, en Nuevo León, no existe previsión expresa de la reelección por distrito diverso al que fueron electos, como sí existe en el estado de Aguascalientes, por lo cual no es aplicable este antecedente al caso concreto.

<sup>18</sup> A página 63 de esa sentencia

<sup>19</sup> Lineamientos cuyo estudio relativo al caso planteado en este asunto, se resolvió en el SUP-JDC-10257/2020



En razón de todo lo anterior, es que este Tribunal local, no puede aplicar lo razonado en estos precedentes al caso concreto, puesto que, dictada por el legislador local en la esfera de su competencia, la norma cuestionada puede válidamente implementarse en tanto no se oponga con la Constitución y no contrarie los límites de la reelección. Sobre esa base es que debe hacerse su estudio.

**7.4. ANÁLISIS DE LA CONFORMIDAD DEL ARTÍCULO 156 A FRACCIÓN V DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES CON LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.** Tras el ejercicio anterior en cuanto a los precedentes citados y no aplicables al caso concreto, se continúa con el análisis de la solicitud de inaplicación del artículo 156 A fracción V del Código Electoral del Estado, de acuerdo a las directrices que privan en nuestro sistema jurídico, donde debe realizarse un estudio previo, cuyas conclusiones sirven de base para determinar si es dable, o no, inaplicar una disposición por considerarla contraria a la Constitución Federal y al orden jurídico internacional vinculante para el Estado Mexicano.

Entonces desde esa óptica y en atención a la solicitud de inaplicación de la norma al caso concreto solicitada por los actores, se debe atender a un control de constitucionalidad, el cual, como ya se apuntó parte de un análisis metodológico donde, -de lo manifestado en los agravios-, se estudiará la normativa aplicada y sus alcances, para contrastarlo con el caso particular que se somete a esta jurisdicción y así determinar su regularidad con la norma suprema.

**7.5. LIMITANTES QUE SE DESPRENDEN DEL TEXTO CONSTITUCIONAL.** En primer lugar, se estudiará si, como se sostiene en los escritos de demanda, se rebasa la libertad configurativa en el caso, porque se contrapone con las limitantes que impone la Constitución.

Este Tribunal considera que es infundado el agravio en cuanto a que el artículo 156, fracción V, contraría las exigencias constitucionales, por las razones siguientes:

Para determinar los límites de la reelección, primeramente, debe fijarse el estándar del derecho a votar y ser votado, que, como derecho humano fundamental y prerrogativa ciudadana de base constitucional y configuración legal, puede sujetarse a diversas condiciones que forzosamente deben ser razonables y no discriminatorias, ya que se sustentan en un principio de igualdad<sup>20</sup>.

Así, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior, que en nuestro sistema normativo conforme al artículo 35 Constitucional, dichas calidades, condiciones, circunstancias y requisitos, para ejercer este derecho deben ser previstas expresamente en la normativa, ya sea local o federal, según sea el caso, y deben, tanto sujetarse a las bases previstas en la Constitución, como respetar cabalmente su contenido esencial, armonizándolo con otros derechos fundamentales de igual jerarquía (v. gr., el derecho de igualdad) y salvaguardando los principios, fines y valores constitucionales involucrados (como, por ejemplo, la equidad, la democracia representativa, el sistema de partidos y los principios de certeza y objetividad, la paridad de género).

<sup>20</sup> Ver artículo 23 del Pacto de San José

En conclusión, el núcleo mínimo del derecho de voto pasivo lo prevé la Constitución Federal, y la completa regulación de su ejercicio, corresponde, para el caso a la legislatura local, en la medida que no establezca indebidas restricciones, al derecho al voto pasivo o a alguno de igual jerarquía.

La Sala Superior, respecto de la Acción de Inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas, que estudia la legislación de Veracruz, apunta que en diversos precedentes<sup>21</sup> la figura de la reelección legislativa en el ámbito local se encuentra en el artículo 116, fracción II de la Constitución Federal, y que su regulación debe respetar lo siguiente:

- Que las constituciones locales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados locales, hasta por cuatro períodos consecutivos.
- También que la postulación solo podrá ser por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Así, con excepción de las aludidas exigencias **expresamente** previstas en el texto constitucional, las entidades tienen libertad de configuración legislativa para regular el régimen de la elección consecutiva de las diputaciones (...) siempre que las normas cumplan, como cualquier otra, con criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

De lo anterior, se observa que la norma impugnada no contraviene en modo alguno las limitantes expresas del texto constitucional.

Esto es así porque el derecho al voto no puede ser ilimitado, y puede ser objeto de regulación, para instrumentarlo y hacerlo operativo en el contexto del sistema democrático, sin embargo, esas restricciones a ese derecho fundamental deben estar respaldadas en un valor o principio constitucional y deben ser adecuadas, necesarias y proporcionales, lo cual será el objeto de estudio en los siguientes apartados.

**7.6. FINALIDADES DE LA REELECCIÓN.** En este apartado se llega a la conclusión de que los agravios vertidos por los actores son **infundados**, puesto que la norma cuya inaplicación se solicita, cumple cabalmente con las razones y finalidades que persigue la reelección.

Es así porque del resultado del análisis de la norma al contrastarla con la interpretación de la Constitución, se verifica que efectivamente, aquella atiende a las finalidades de la reelección.

<sup>21</sup> Acciones de inconstitucionalidad 29/2017 y sus acumuladas, y 61/2017 y acumuladas

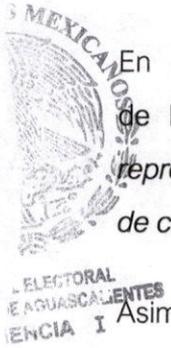


Tal y como lo señala la Sala Monterrey en el SM-JRC-32/2021, la reforma electoral del diez de febrero de dos mil catorce, al habilitar la reelección como vía de postulación a determinados cargos públicos, el Poder Reformador de la Constitución, enderezó sus razones en lo siguiente:

Según el Dictamen de esa reforma, durante el proceso legislativo que incorpora la reelección legislativa y municipal al texto constitucional, identificando las siguientes ventajas<sup>22</sup>:

- i. Que exista un vínculo más estrecho con el electorado, ya que el mismo ratificará, mediante su voto, a las y los servidores públicos en su encargo.
- ii. Que se abona a la rendición de cuentas y fomenta relaciones de confianza entre representantes y representados.
- iii. Se profesionaliza la carrera de las y los legisladores, para contar con representantes más calificados para desempeñar sus facultades. Lo que propicia un mejor quehacer legislativo en beneficio del país y un mejor entorno para la construcción de acuerdos.
- iv. Se fortalece el trabajo legislativo y permite dar continuidad y consistencia a las funciones propias de las Cámaras.

En términos similares, la Sala Superior ha sostenido que la dimensión social de la reelección tiene los siguientes propósitos: a) crear una relación más directa entre los representantes y los electores; b) fortalecer la responsabilidad de los legisladores y por tanto la rendición de cuentas, y c) profesionalizar a los legisladores o a los funcionarios reelectos.



Asimismo, ha señalado que la posibilidad de elección consecutiva es un mecanismo que mejora la democracia porque, a través de la rendición de cuentas, la reelección no se presenta exclusivamente para beneficiar al funcionariado reelecto, atiende a un bien mayor, darle a la ciudadanía una herramienta para que sus políticos los representen de mejor manera<sup>23</sup>.

Por su parte, la Suprema Corte ha señalado que uno de los objetivos de la elección consecutiva es reconocer el desempeño de aquel (o aquella) servidor(a) público(a) que se vio favorecido(a) con el voto popular<sup>24</sup>. Lo cual, desde luego, constituye otro beneficio democrático que incentiva el buen trabajo del funcionariado público ante una posible reelección y posibilita al electorado recompensarle o no.

Una vez definidas es preciso atender las razones o fines que persiguió el legislador local que lo llevó a introducir la posibilidad de reelección por el mismo distrito, o por diverso, para una diputada o diputado que, en la elección anterior, hubiere obtenido su curul por el principio de mayoría relativa, para verificar si sus finalidades se contraponen, o son congruentes.

<sup>22</sup> Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con las iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral; como también se cita en la acción de inconstitucionalidad 126/2016 y acumulada, correspondiente al Estado de Quintana Roo.

<sup>23</sup> SUP-REC-116/2018

<sup>24</sup> Acción de inconstitucionalidad 40/2017 y acumuladas; relativa al Estado de Morelos

**7.7. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA REFORMA LOCAL.** Ahora bien, al analizar las razones que llevaron al Colegio Legislativo a reformar la disposición que ahora se controvierte, tenemos que manifestaron lo siguiente<sup>25</sup>:

*“3. Homologación normativa y jurisdiccional en materia de reelección. Reforma que en principio tiene como finalidad homologar el marco normativo local respecto tanto de la última reforma federal, así como de los diversos antecedentes judiciales y locales. Lo anterior con la finalidad de eliminar las discordancias existentes entre la normativa vigente y la jurisprudencia definida de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación contribuyendo con ello a dar mejor cumplimiento a los principios constitucionales de certeza, legalidad y objetividad como rectores constitucionales de la materia electoral. Asimismo, y en seguimiento de la temática relativa a la reelección, en aras de fortalecer tanto la profesionalización como la rendición de cuentas en el ámbito legislativo, se estima prudente homologar el marco normativo en materia de reelección consecutiva a fin de armonizarlo con los límites constitucionales establecidos en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior en la lógica de dotar de mayor autonomía, profesionalismo y rendición de cuentas dentro del ámbito legislativo, empoderando con ello a los ciudadanos en la fiscalización y valoración del trabajo de sus representantes políticos.*

*A fin de garantizar la voluntad de los ciudadanos y el derecho de reelección los diputados que busquen renovar su encargo, podrán contender por un distrito diverso al que fueron electos, esto en razón de que los legisladores, son servidores públicos de la sociedad en general y no sólo del distrito emanado, tal ampliación de ese derecho, descansa en la libertad configurativa estatal.*

*Aunado a lo anterior, el trabajo del legislador debe ser evaluado por la generalidad de la sociedad, es decir obliga al servidor público a dar resultados en la entidad y no sólo la demarcación distrital. Además, la demarcación geográfica de Aguascalientes, permite que el trabajo legislativo y un diputado o diputada tenga implicaciones directas en todo el estado. Por ello, es viable que, en la lógica de profesionalizar la carrera de los legisladores, dotar de mayor autonomía, compromiso y rendición de cuentas dentro del ámbito legislativo, empoderando con ello a los ciudadanos en la fiscalización y valoración del trabajo de sus representantes políticos, un diputado que aspira a la reelección, pueda ser registrado en diverso distrito al que fue electo. Así, se garantiza el derecho de reelección tanto en la vertiente individual del servidor público, como en la colectiva de la ciudadanía al permitir que sea la propia sociedad la que valide o no, la labor del legislador.”*

Así, se tiene que la finalidad que la norma impugnada, contrastada con la disposición Constitucional, es coincidente con los motivos expresados por el Constituyente Permanente, puesto que con base en su libertad configurativa y atendiendo a las características geográficas y sociales de la entidad, con tal reglamentación, es posible lograr, un vínculo más estrecho, empoderar a la ciudadanía e involucrarla en los asuntos de Estado, mejorar la rendición de cuentas, fomentar la profesionalización de sus legisladores, lo anterior, en beneficio de la sociedad.

**7.8. ES POSIBLE LOGRAR LOS FINES DE LA REELECCIÓN MEDIANTE EL MECANISMO IMPLEMENTADO EN LA NORMA SUJETA A ANÁLISIS.** Ahora, pro seguiremos a analizar si, no obstante, su compatibilidad con las razones para la habilitación de la reelección en nuestro marco

<sup>25</sup> Páginas 366 a 368 [http://congresoags.gob.mx/agenda\\_legislativa/descargar\\_pdf/1521](http://congresoags.gob.mx/agenda_legislativa/descargar_pdf/1521)



constitucional, los fines que persiguió la norma sujeta a análisis, son posibles en nuestro Estado, es decir si responden y corresponden a la realidad social en el Estado.

Según la Acción de Inconstitucionalidad 40/2017 del Estado de Morelos, la Corte resolvió que en cuanto a las Reglas de la reelección, estas son parte de la libertad de configuración, el artículo 134 sigue rigiendo en cuanto a la obligación de salvaguardar los recursos del cargo que desempeñan al establecer:

- Respecto al número de veces que puede reelegirse consecutivamente
- Forma de postulación específica
- Principios de autodeterminación, paridad, proporcionalidad y razonabilidad
- Objetivo de rendición de cuentas que conlleva esta figura

En el SUP-JRC-406/2017 y acumulados, al analizar los alcances de la modulación de la reelección diseñada por la normativa del Estado de Morelos, establece que *"queda a discreción del legislador determinar los requisitos de elegibilidad para acceder a los cargos públicos de elección popular, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."*



Según los actores se desvirtúa la reelección porque al tratarse de postulaciones vía reelección por mayoría relativa, debe ser por la misma demarcación, entonces el punto de conflicto que debe contrastarse entre estas normas es si la finalidad constitucional se cumple o se desvirtúa con la forma en que el legislador local la introdujo en su sistema.

No se pasa por alto, que, en sus escritos de demanda, los actores se duelen de que el CG en las resoluciones combatidas, omite valorar debidamente las implicaciones territoriales y jurídicas implícitas dentro de la elección por el principio de mayoría relativa en relación a la elección consecutiva.

Este análisis igualmente tiene como base, las diversas acciones de inconstitucionalidad que hablan del tema, así como las opiniones y sentencias de la Sala Superior y Sala Regional Monterrey al respecto, y las últimas resoluciones de la Corte que, a juicio de este Tribunal, aplican para el caso de determinar si la rendición de cuentas es posible en un Estado como este.

**7.9. TESIS DE LA DECISIÓN.** El artículo controvertido por los promoventes, cae bajo la libertad configurativa y no se opone con ningún ordenamiento constitucional, su finalidad se cumple en el caso concreto porque al momento de legislar, el cuerpo legislativo centró su análisis en la posibilidad de rendición de cuentas, considerando la convivencia de principios y derechos, que por la geografía y tamaño del congreso, y forma de integración responde en mejor y mayor forma a todos los fines que se persiguieron con la reforma de 2014 que introduce la reelección, como la de 2019 que habla de la paridad, potenciando el derecho de la ciudadanía a calificar a sus legisladores mediante la rendición de cuentas, y la posibilidad de éstos de optar por la reelección.

i. **TERRITORIALIDAD, COMO CONDICIONANTE DE LA ELECCIÓN CONSECUTIVA POR EL MISMO DISTRITO ELECTORAL TRATÁNDOSE DE MAYORÍA RELATIVA.** No pasa por alto lo señalado en diversos precedentes y acciones de inconstitucionalidad donde no se entiende la restricción territorial como una limitante al derecho a ser votado, así como tampoco, lo que se señala en la reforma al artículo 54 de la Constitución que data de dos mil catorce.

Del análisis que se desprende del Diario de debates<sup>26</sup> de la reforma en comento, tenemos que, forzosamente para el análisis del tema de la elección consecutiva por el mismo distrito por el que se obtuvo la diputación, debe ser ligado naturalmente con el fin que persigue, que es, entre otros, el de lograr lazos, cercanía, rendición de cuentas, profesionalización del ejercicio parlamentario y la continuidad de las decisiones que ofrezcan mejores resultados.

En tal sentido, en un contexto federal, la territorialidad se entiende y toma razón, por las propias condiciones de los **distritos federales**<sup>27</sup>, que son resultado de la división territorial de cada Estado<sup>28</sup>, conformados de acuerdo a un peso poblacional que hace equilibrada la representación, congruente con ello, es lógico que por las distancias y por el sentido de pertenencia del ciudadano a su Estado, sea razonable que, por ejemplo; si se ostenta el cargo de una diputación por algún distrito federal del estado de Yucatán, quede vedada la posibilidad de ser diputado por otro distrito ubicado en Baja California, ya que el objetivo de la cercanía, e incluso DE LA RESIDENCIA -requisito de elegibilidad para las diputaciones federales- no se cumpliría, además de complicar el que la ciudadanía de aquél estado, conozca o esté familiarizado de mejor forma que los ciudadanos que residen en éste.

En consecuencia, se debe entender que la reelección no es un derecho, sino una forma de instrumentar el derecho al voto, siendo la exigencia de la territorialidad una forma de modulación que permite perfectamente la consecución de los fines que se persiguieron por el poder reformador de la Constitución.

ii. **DATOS ESENCIALES PARA CONCRETIZAR ELEMENTOS DE ANÁLISIS Y COMPARATIVOS**

Es de relevancia para el análisis de este tema, estudiar la composición social del municipio de Aguascalientes, debido a que, en el caso concreto, los candidatos se encuentran postulados por distritos que se encuentran en el mismo municipio, dentro de la zona urbana, y deben atenderse también a estos datos para verificar si es posible tanto la representatividad como la rendición de cuentas.

Esta autoridad, además de elementos cartográficos, analizó los resultados que arrojan las estadísticas censales a escalas geoelectorales realizados por el INEGI, y el Programa de Ordenación de la Zona Conurbada y Metropolitana 2013-2025 de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de Romo<sup>29</sup>,

<sup>26</sup> [https://www.senado.gob.mx/64/diario\\_de\\_los\\_debates](https://www.senado.gob.mx/64/diario_de_los_debates)

<sup>27</sup> [https://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5483622&fecha=19/05/2017#:~:text=ACUERDO%20INE%2FCG59%2F2017%20del,de%20la%20Junta%20General%20Ejecutiva.](https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5483622&fecha=19/05/2017#:~:text=ACUERDO%20INE%2FCG59%2F2017%20del,de%20la%20Junta%20General%20Ejecutiva.)

<sup>28</sup> De hecho, es un criterio de distritación el respeto de los límites estatales, es decir, del cociente poblacional se hace la división POR POBLACIÓN ESTATAL para definir cuántos distritos le corresponden a cada uno, siendo que el mínimo es dos, -Artículo 53 de la CPEUM-, por lo tanto, en un re distritación jamás se juntarán dos o más Estados para conformar un distrito federal.

<sup>29</sup> Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, segunda sección publicado el día 24 de noviembre de 2014



para valorar si el panorama socioeconómico de la entidad hace factible que la norma sujeta a cuestionamiento, cumpla de hecho, y de derecho con el bloque de constitucionalidad.

En aras de situar el caso concreto, se presentan datos esenciales, que particularizan al Estado de Aguascalientes, lo anterior, para contar con elementos que permitan a este Tribunal analizar si, a la luz del texto constitucional y las diversas interpretaciones y precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la norma cuestionada es conforme a las bases legales.

Esta autoridad, además de elementos cartográficos, analizó los resultados que arrojan las estadísticas censales a escalas geo electorales realizados por el INEGI, para valorar si el panorama socioeconómico de la entidad hace factible que la norma sujeta a cuestionamiento, cumpla de hecho, y de derecho con el bloque de constitucionalidad<sup>30</sup>, entonces, tenemos los siguientes datos:

SUPERFICIE	5,617 Km <sup>2</sup> , representa el 0.3% del territorio nacional
POBLACIÓN TOTAL	1'425,607 habitantes, representa el 1.1% de la población nacional, y se compone en un 51.1% por mujeres y en un 48.9% por hombres.
DENSIDAD POBLACIONAL:	Es el <u>quinto estado con mayor densidad poblacional</u> en el país, tiene 253.9 habitantes/km <sup>2</sup> , comparado con Nuevo León, que hay 90.
ESTADO MAYORMENTE URBANO:	A pesar de su tamaño, por su concentración y características, constituye la <u>treceava zona metropolitana más grande del país</u> . Cerca del 80% de los habitantes del Estado residen en ésta.
SUPERFICIE DE LA ZONA URBANA:	1903 km <sup>2</sup> , equivalente al 33.83% de la superficie del Estado.
ACCESO A TICS:	La captación de información sobre disponibilidad de bienes y de acceso a tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la vivienda particular habitada, es de gran importancia, pues se considera que con ésta se adquiere conocimiento sobre las variables que permiten identificar <b>la incorporación de la población a la vida moderna</b> , lo cual para temas de identidad y de acceso a la información y rendición de cuentas en estos casos concretos.
MOVILIDAD:	El tiempo que invierte la población ocupada para llegar al lugar de trabajo contribuye al análisis de la problemática relacionada con movilidad laboral, es por ello que en la Encuesta Intercensal se captó información sobre el particular, y se obtuvo que las personas ocupadas, ocupan entre 15 minutos y 2 horas para trasladarse de su vivienda a su lugar de trabajo. <sup>31</sup>



<sup>30</sup> Al respecto, cabe mencionar que en la sesión en la que se discuten y aprueban las diversas modificaciones al código electoral, se trataron temas relativos a las características demográficas del estado y su situación socio política, lo cual demuestran que los legisladores, en esa sesión tuvieron a la mano elementos para sopesar o analizar si la reforma planteada en esos términos correspondía con la realidad del Estado. Así mismo, en otros temas, se resaltó la importancia de fortalecer la paridad de género, por lo cual sigue la lógica de que el derecho a la reelección y la paridad y los demás derechos que confluyen en una elección no sean anulados entre sí, y puedan alcanzar una armonización en la medida de lo posible.

<sup>31</sup> Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015 Aguascalientes, INEGI. [http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod\\_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva\\_estruc/inter\\_censal/estados2015/702825079246.pdf](http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/estados2015/702825079246.pdf)

De lo anterior, tomando en cuenta la situación geográfica del Estado, su superficie, las vialidades y conectividad interestatal, se puede concluir que, en este Estado, particularmente en el municipio capital, los habitantes no necesariamente trabajan cerca de su domicilio, lo que permite una movilidad y una conexidad entre los distritos electorales, a diferencia de lo que puede ocurrir en entidades de grandes orbes cuyas geografía y composición extrema la ubicación de los distritos.

En ese entendimiento, de los datos arrojados por el INEGI, tenemos la siguiente información que permite tener un panorama de la realidad socio económica de la población en el municipio de Aguascalientes:

32.

iii. **ZONA METROPOLITANA.** Una zona metropolitana se conforma por centros de población o conurbaciones que, por su complejidad, interacciones, relevancia social y económica, representan una unidad territorial de influencia dominante, y revisten importancia estratégica para el desarrollo nacional.

Este fenómeno de crecimiento poblacional, consistente en la extensión y conjunción de zonas urbanas correspondientes a distintas demarcaciones político-administrativas, tiene distintas implicaciones en el ámbito de ejercicio de la función pública.

La conformación de una metrópoli no es una simple agregación de diversas partes de las ciudades.

Entonces, tenemos que la metrópoli mantienen relaciones de intercambio, funcionales, económicas, se define en términos del ámbito espacial en el que se desenvuelven las actividades cotidianas de la población residente: trabajo, estudio, recreación, habitación y las movilidades correspondientes, por lo que no se define únicamente por su localización geográfica, aunque, desde luego, tiende a existir un grado importante de correspondencia entre lo geográficamente central y la centralidad metropolitana y lo periférico y la localización geográfica periférica respecto de un núcleo que opera como centro.

La escala y la complejidad de sus funciones hace que los problemas metropolitanos sean de otro orden; no solo cuantitativos, sino cualitativos, que implican nuevas formas de gobernar para decidir qué actores, quiénes y cómo deben actuar para resolver cada uno de ellos<sup>33</sup>.

Es decir, la creación de zonas metropolitanas producto del incremento de la población, presenta nuevos e importantes retos en la forma de ejercer el gobierno de una determinada comunidad, máxime cuando se presenta un fenómeno de agregación de importantes zonas urbanas correspondientes a más de una unidad político-administrativa.

No obstante, no debe perderse de vista que el fenómeno electoral no puede ser ajeno a la dinámica poblacional de los centros urbanos, lo cual, hace necesario ajustar las disposiciones en la materia, a la realidad que se vive en la sociedad.

<sup>32</sup> [https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod\\_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva\\_estruc/702825197728.pdf](https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825197728.pdf)

<sup>33</sup> SUP-REC-26/2015



Bajo este contexto, la conformación de zonas metropolitanas tiene una vinculación directa como la toma de decisiones de gobierno, las cuales ya no pueden realizarse desde la perspectiva individual de cada una de las unidades político-administrativas que la conforman, sino que se hace necesaria la convergencia de todos sus integrantes en el diseño de políticas comunes, para la solución uniforme de la problemática urbana.

Lo anterior tiene plena razonabilidad, tomando en cuenta la dinámica común que existe en una zona metropolitana, lo que permite que cualquiera de los ciudadanos que residen en ella, pueda tener una visión integral de la problemática que enfrenta la misma.

Conforme al marco teórico y normativo expuesto, se hace evidente que existe un estrecho vínculo entre la actividad política encaminada al ejercicio de un cargo de elección popular, que implica la postulación de una serie de acciones de política pública y el ámbito geográfico-poblacional en que se han de aplicar las propuestas de los partidos políticos y candidatos.

En este sentido, si los actores políticos deben plantear una serie de propuestas que tengan por objeto atender la problemática y necesidad de una comunidad determinada, resulta connatural que en las zonas metropolitanas (en las que la delimitación político administrativa ha perdido relevancia) tales propuestas deban tener una visión igualmente metropolitana.

Esto es así, pues como ya se dijo, las zonas metropolitanas necesitan de la convergencia de distintos órdenes y niveles de gobierno, sobre todo por lo que hace a las cuestiones de infraestructura urbana, desarrollo sustentable y prestación de servicios.

De esta suerte, resulta razonable y proporcional que la población que diariamente se traslada entre estos territorios pueda tener acceso a información sobre los precandidatos, partidos políticos y sus propuestas, mediante información distribuida en todo el territorio de la zona urbana en común.

Así conviven la proximidad espacial con la neta separación de ciertos estratos o clases sociales respecto de otros, lo cual plantea más problemáticas. Es decir, la unidad metropolitana se da por la relación que cada uno de sus componentes guarda con el resto. Un indicador clave en este sentido es la organización espacial del mercado de trabajo.

Lo anterior, hace necesario el reconocimiento y desarrollo de políticas públicas en esta escala, por lo que resulta evidente la vinculación que existe entre la metropolización, los cambios económicos y productivos como resultado de la especialización económica y la generación de políticas públicas en el marco del desarrollo de proyectos que buscan impulsar el desarrollo económico y social.

Un área metropolitana no sólo se caracteriza por tener un ritmo constante de crecimiento poblacional y urbano, sino también por tener diferentes estructuras económicas y sociales. Lo que hace imprescindible las mediaciones institucionales.



Luego entonces, debe considerarse que existe una mayor diversidad social, pues es un espacio más heterogéneo que proveerá más recursos materiales, institucionales y sociales para sus residentes.

Así, tras un análisis comparativo en el tiempo entre dimensiones y ciudades es necesario para entender mejor las implicaciones de política pública y considerar alternativas para generar ciudades menos segregadas y más equitativas.

La necesidad de establecer políticas públicas que fomenten la convivencia residencial entre los estratos sociales se basa en los múltiples trabajos que muestran los dañinos efectos que la segregación residencial tiene sobre las oportunidades de vida de hogares más desfavorecidos al ubicarlos en contextos con escasos recursos materiales e institucionales; dichos efectos se evidencian en resultados negativos en salud, educación, empleo y exposición al crimen, entre otros (ver Wilson, 1996; Sampson *et al.*, 2002 y Kaztman, 2001)<sup>34</sup>.

Un aspecto esencial es el surgimiento de mecanismos innovadores que permitan la representatividad metropolitana que permita construir y dar continuidad a políticas públicas que permitan disminuir las desigualdades socio territoriales<sup>35</sup>, por lo cual, es imprescindible que los legisladores estén atentos, e inmersos en la realidad social que trasciende los límites geográficos de sus distritos para fundirse con una forma de organización que debe estar armonizada y coordinada<sup>36</sup>.

iv. **DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA GEOGRAFÍA ELECTORAL**<sup>37</sup>: El aspecto más importante de una división del territorio en distritos, radica en lograr que cada distrito represente aproximadamente a la misma cantidad de personas -no de ciudadanos-, lo que equivale a buscar igualdad en el valor de todos los votos.

v. **PESO POBLACIONAL**: Se distribuye en 607 secciones electorales, las cuales, para efectos de clasificación del Registro Federal de Electores, se consideran de menor complejidad ya que se trata de distritos ubicados en una zona metropolitana con una alta concentración de la población.

Esto, en función a diversos factores, como son, componentes geográficos, superficie y tiempo de traslado de la cabecera distrital a las secciones en minutos; componentes demográficos, donde se toma en cuenta la **densidad poblacional**, así como el **alto grado de urbanización** (puesto que la inmensa mayoría de las secciones son urbanas en comparación con las urbanas).

vi. **DISTRITACIÓN ELECTORAL. SU DISEÑO, ALGORITMOS, PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS SECCIONES Y LOS DISTRITOS**. La distritación electoral es la división periódica que se hace del territorio estatal para efectos electorales, por cada distrito, habrá un diputado de mayoría relativa.

<sup>34</sup> <https://rde.inegi.org.mx/index.php/2012/05/05/cambios-en-la-segregacion-residencial-socioeconomica-en-mexico/>

<sup>35</sup> <https://www.gob.mx/sedatu#7138>

<sup>36</sup> <http://www.onuhabitat.org.mx/index.php/la-nueva-agenda-urbana-en-espanol>

<sup>37</sup> <https://cartografia.ife.org.mx/sige7??distritacion>



Aguascalientes está dividido para efecto de la celebración de elecciones federales, en 3 distritos, el distrito 1 conformado por todos los municipios del interior y los distritos 2 y 3 que por el municipio capital; y para las elecciones locales, el Estado se divide en 18 distritos electorales<sup>38</sup>, de los cuales 12 distritos están contenidos dentro del Municipio de Aguascalientes, y los otros 6 distritos son compuestos por los 10 municipios restantes del interior.

El principal objetivo de una distritación electoral, es garantizar el valor idéntico de cada voto, es decir, que cada diputado represente a la misma cantidad de habitantes, por lo tanto, la delimitación geográfica de las fronteras distritales tiene relación directa con la distribución de la población en el Estado, en cada distrito debe haber, en la medida de lo posible, la misma cantidad de habitantes.

La representatividad y el principio de equidad van de la mano, la falla en uno de éstos afecta al sistema democrático en general, por ello es de suma importancia que el Estado garantice el ejercicio del voto a quien tenga ese derecho y defina dónde lo puede ejercer, es ahí donde la distritación permite que estos derechos fundamentales sean operativos.

La Constitución, ordena la revisión periódica del peso poblacional de los distritos electorales tanto federales como locales, a efecto de adecuar la cartografía electoral y teniendo como principal insumo los datos que arroja el censo de población y vivienda proporcionados por el INEGI.

La dinámica poblacional es constante, responde a índices de natalidad, mortalidad y migración, podemos calcular cuánto vamos a crecer, pero no predecir a dónde se va a ir a vivir la gente, ni cuándo, por consiguiente, al paso del tiempo se producen cambios en el peso de cada distrito. Cuando éstos pierden su equilibrio, la autoridad electoral aplica una serie de mandatos legales y criterios imparciales que son las reglas que, mediante la aplicación de procedimientos científicos y automatizados armonizarán el mapa geoelectoral.

Es decir, por el cambio el peso poblacional y su distribución en el territorio, el diseño de los distritos puede variar sustancialmente en una o diversas secciones, dando como resultado cambios en la composición seccional -y, por ende- territorial de los distritos anteriores.

Esto, a través del diseño de modelos matemáticos que implementan algoritmos heurísticos que no son otra cosa, que procedimientos que, *sin garantizar una solución óptima para un problema dado*, utilizan algún tipo de conocimiento sobre el espacio de búsqueda para poder obtener buenas soluciones al problema en cuestión.

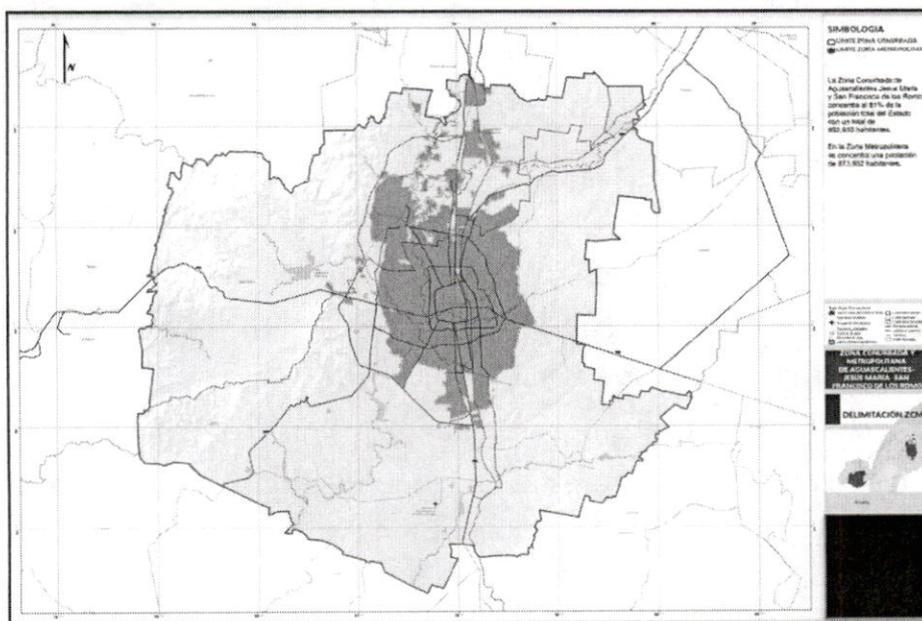
Como en el caso que nos ocupa, se trata de estudiar la conformidad con la Constitución de una norma que permitió postulaciones de diputados que vía reelección por el principio de mayoría relativa en distritos distintos al que les dio el triunfo en la elección inmediata anterior, es que resulta importante tomar en cuenta algunos criterios de distritación:

<sup>38</sup> <https://cartografia.ife.org.mx/descargas/distritacion2017/federal/01/D01.pdf>

- **Integridad municipal:** Se busca que sean conformados por municipios completos; en caso de que algún municipio presente una población total mayor al cociente poblacional determinado, se buscará formar distritos completos a su interior, y la fracción territorial excedente se integrará a municipios colindantes para formar otro distrito. En todo caso, se busca involucrar al menor número de municipios.
- **Contigüidad de Fronteras.** Se refiere básicamente a la conformación de Distritos a partir de unidades vecinas entre sí; con ello se busca que el territorio del distrito electoral no esté fragmentado por unidades espaciales en forma de islas. Por lo anterior, los Distritos Electorales uninominales serán colindantes y no se interpondrá territorio de un distrito dentro de otro, lo anterior considerando el marco geográfico electoral vigente emitido por el Instituto Federal Electoral; considerando, en su caso, las características geográficas la Entidad.
- **Conectividad.** Con este criterio se optimizan los tiempos de traslado para los recorridos en sus puntos de conexión del propio Distrito, considerando su tamaño o extensión, así como las vías de comunicación terrestres, con ello se busca facilitar a los Ciudadanos del sufragio de tal forma que le sea asequible el traslado al lugar en el que habrán de sufragar y la autoridad no encuentre dificultades para recibir los expedientes de casilla y realizar los cómputos respectivos.

vii. **LOCALIZACIÓN DE LOS DISTRITOS UNINOMINALES POR LOS QUE CONTIENDEN LAS CANDIDATOS IMPUGNADOS.** Ahora bien, a efecto de situar geográfica y visualmente las candidaturas controvertidas, se insertará en imagen la ubicación de los distritos en donde han sido registrados con la anotación del distrito origen, cabe precisar que la mancha urbana que conforma el municipio capital está compuesta por los distritos 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.

#### Zona Conurbada y Zona Metropolitana.



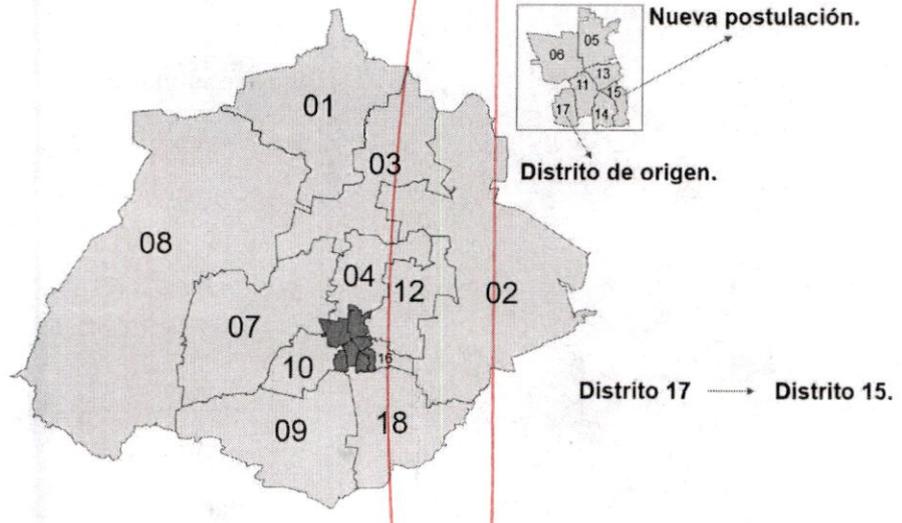
Ahora bien, lo candidatos cuyo registro se impugna contienen por los distritos que a continuación se muestran:



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

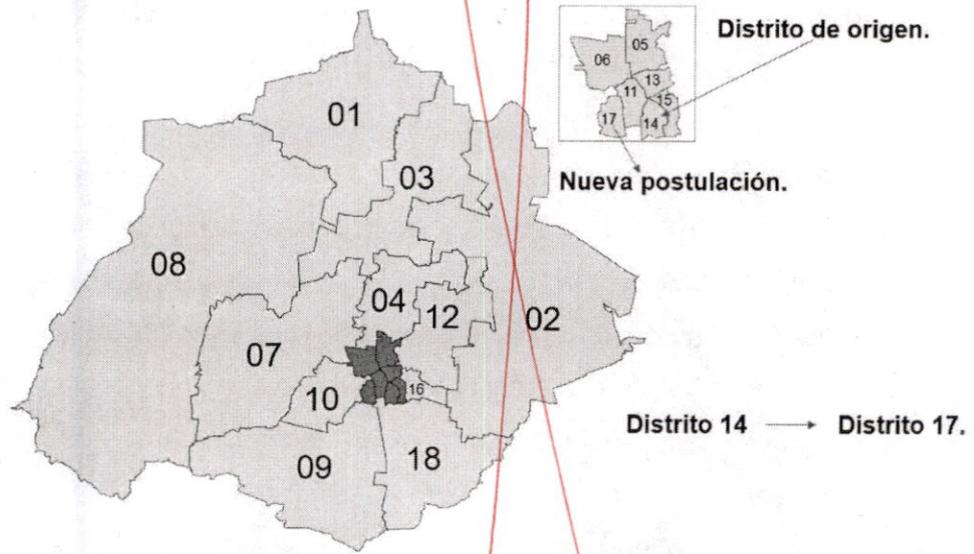
a. Patricia García García.

**Patricia García García**



b. Luis Enrique García López.

**Luis Enrique García López**



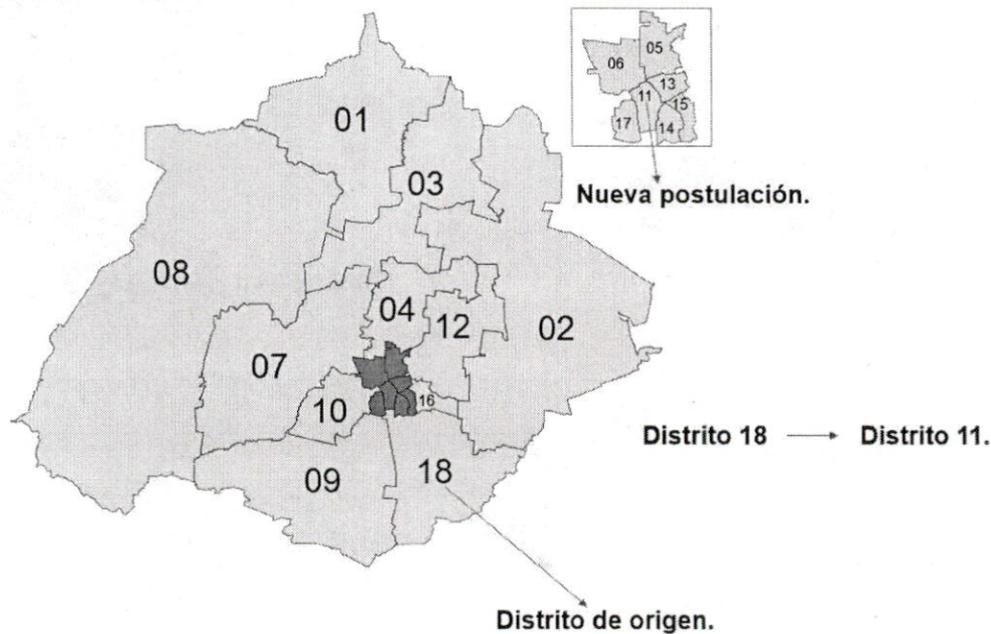
MEXICANOS  
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
CIRCUITO I



TRIBUNAL ELECTORAL  
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

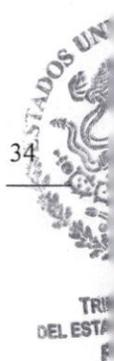
c. Gladys Adriana Ramírez Aguilar

### Gladys Adriana Ramírez Aguilar



De lo anterior, es posible que esta autoridad concluya que:

- i) Entre los distritos de origen y de postulación en los casos planteados, se encuentran comprendidos, todos en el Municipio de Aguascalientes, que, además, están dentro de la mancha urbana o zona metropolitana;
- ii) Tomando en cuenta todos los criterios que se emplearon para la distritación en este Estado y en consideración al alto grado de optimización cuya función de costo fue próxima a cero, es que se logra conseguir en el diseño de los distritos debido a la composición seccional y a la geografía del Estado, determinando así que estos distritos son prácticamente vecinos;
- iii) Aguascalientes es un Estado pequeño en población con una alta concentración poblacional, con una alta movilidad, y unas vías de comunicación adecuadas, que su población casi en su totalidad está alfabetizada y que tienen en general acceso a los TICS.
- iv) La urbanización, por sus características, es un proceso que comprende que todas las autoridades del Estado, se armonicen y trabajen en conjunto, ya que lo que se logra es la unificación de su sociedad.
- v) Los distritos, contienen en su interior un tejido socio económico complejo, es decir, confluyen y conviven diversos estratos sociales, culturales e ideológicos.
- vi) El diseño de los distritos varía según las fluctuaciones de su población.
- vii) En Aguascalientes un 25% de la población no registra sus cambios de domicilio, de lo que se puede concluir que es imposible asegurar que la población que compone un distrito siempre es la misma, por lo que el argumento de la territorialidad, para el caso, no tiene la suficiente fuerza como para demostrar la inconformidad con la constitución, los fines que persigue la reelección, o alguna conculcación al derecho al voto activo, o pasivo.
- viii) Es factible que los diputados conozcan y visiten el territorio de otros distritos, por un lado, porque la ley los obliga a hacerlo<sup>39</sup> y por el otro, porque les está permitido que, al rendir su



34

TRIBUNAL ELECTORAL  
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

<sup>39</sup> Artículo 3° de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes



informe de labores anual, se haga difusión en todo el territorio del Estado<sup>40</sup>, lo cual, por las características propias de la entidad, hace muy posible que los ciudadanos conozcan a sus legisladores, los identifique, y valore su trabajo.

- ix) Existen varios mecanismos en la legislación que abonan a la rendición de cuentas, ejemplo de ello la revocación de mandato.
- x) Aguascalientes conforma una zona conurbada donde existen varios niveles de segregación, lo cual, da cuenta de las diferencias en los niveles socioeconómicos y las formas históricas de organización del espacio urbano.

Además, es importante tomar en cuenta, que el valor de un índice de segregación depende de la escala (manzana, AGEB, municipio) y el indicador empleado, en particular la definición de los grupos poblacionales, por eso se considera, contrario a lo expuesto por los actores, difícil tener que la formación de la opinión pública, los mecanismos de democracia directa y la rendición de cuentas, solo puedan ser operativos y cumplir su finalidad respecto de determinada división distrital en una zona metropolitana.

Por lo tanto, el diseño de la norma, también es congruente con la profesionalización, la calidad, la continuidad en el ejercicio, el seguimiento de proyectos, y la construcción de acuerdos, todos, fines comunes a la reelección.

**7.10. LAS CANDIDATURAS IMPUGNADAS NO VIOLENTAN LA GARANTÍA DEL VOTO EN SUS DOS DIMENSIONES.** Permitir la reelección en los términos diseñados por la norma, tiende a un bien mayor, en mejora de la democracia, para que los representen de mejor manera. En suma, siguiendo la línea interpretativa de la Sala Superior, por ejemplo, en el juicio SUP-REC-1173/2017, a partir de la reforma de derechos humanos que tuvo lugar en dos mil once y la interpretación que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema, en el régimen constitucional mexicano, *"la lectura de las normas que definen la reelección debe realizarse en un sentido pro persona para flexibilizar las normas conducentes a efecto de aprovechar la experiencia de quienes ya han desempeñado cargos"*.

En el precedente, SUP-JDC-35/2018 y sus acumulados, la Sala Superior confrontó la constitucionalidad de una acción afirmativa de género (regla de alternancia en bloques de competitividad) frente a la posibilidad de reelección y se concluyó que aquella medida *"incidiría tanto en la auto organización de los partidos políticos como en los derechos de votar y ser votado; asimismo, se aprecia que la ciudadanía se vería limitada en algún grado en algún beneficio que pudiera derivar de la reelección, como sería, por ejemplo, el de reconocer el buen desempeño de sus servidores públicos, situación contraria a la que se pretendió consolidar a través de la incorporación de la figura de la reelección."*

De lo transcrito se puede concluir que las finalidades que persiguió la reforma son coincidentes con la finalidad del poder reformador de la constitución, y es de resaltar que atiende a la realidad local, lo cual es congruente con lo señalado párrafos arriba, en cuanto al derecho de los Estados a diseñar





mecanismos que, de acuerdo a sus condiciones particulares, tiendan a responder sus necesidades específicas, y mejorar las condiciones de la sociedad.

En la acción de inconstitucionalidad 29/2017 la SCJN dice en la parte que interesa *"los estados de la república tiene libertad de configuración legislativa para regular el régimen de la elección consecutiva siempre y cuando las normas cumplan como con cualquier otra, con criterios de proporcionalidad y razonabilidad"*.

Por lo tanto, la proporcionalidad y razonabilidad deben ser parámetros de control de tales disposiciones normativas, particularmente por regular una modalidad del derecho del voto -que lo posibilite, no que lo haga nugatorio-, por lo tanto, el andamiaje normativo debe posibilitar que el ciudadano alcance mediante el ejercicio pleno de sus derechos los fines que desde la Constitución han sido planteados

En la SUP/OP/15/2020, referente a la Acción de Inconstitucionalidad 165/2020 y 166/2020, se estudia la legislación de Jalisco, -donde, al igual que en Aguascalientes, se permite el establecimiento de zonas metropolitanas o conurbada- y se puede contender por municipio diverso en elección consecutiva o reelección mientras se encuentre dentro de una zona metropolitana, la Sala razona lo siguiente:

*"se incorporó al texto constitucional la posibilidad de que los diputados y miembros de los ayuntamientos de las entidades federativas sean reelectos en sus cargos.*

*Así, las entidades federativas están obligadas a introducir en sus ordenamientos constitucionales la elección consecutiva de los integrantes de los ayuntamiento de sus legislaturas; sin embargo, se les otorgó libertad configurativa para establecer la regulación pormenorizada de esta posibilidad de reelección, estableciéndose dos limitantes: que la elección consecutiva sea por un periodo adicional y el mandato no sea superior a tres años y que la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.*

*Aunado a lo anterior, se debe mencionar que en la Constitución federal no existe obligación de regular la figura de reelección entre los municipios que integran una zona metropolitana. Además, los supuestos planteados por el accionante, en su caso, deberán analizarse caso por caso.*

*En tal sentido, se considera que no existe la omisión alegada."*

Al respecto, al resolver Acción de inconstitucionalidad 165/2020, la corte en Pleno<sup>41</sup>, exponen el criterio de que:

*"las omisiones legislativas que pueden considerarse contrarias a la Constitución son solamente las referidas a un ejercicio obligatorio y de carácter relativo, pues solo estas pueden ser exigidas al legislador, mientras las de ejercicio optativo quedan dentro de la libre configuración y la soberanía de las entidades federativas, (...) siendo ejercicio optativo su regulación pormenorizada.*

*(...)*

*Si en las disposiciones reclamadas, por un lado, se establece el aspecto temporal, al sostener que los miembros de los ayuntamientos podrán ser postulados por única vez al mismo cargo para el periodo inmediato siguiente, esto resulta acorde con el mandato constitucional, estableciéndose, además, conforme a la propia Constitución Federal que, si los municipes fueran electos en el cargo como candidatos de un partido o varios partidos políticos coaligados, la nueva*

<sup>41</sup> Consultada mediante su versión taquigráfica



postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los otros partidos de la coalición que lo hubieren postulado."

De lo subrayado, tenemos claramente que al momento de dilucidar los límites de la reelección que pueden ser impuestos por la legislatura al momento de analizar la norma, la Corte tiene lo siguiente:

- a. Su regulación en la legislación local es un ejercicio optativo, y que por lo tanto cae dentro del espectro de la libertad configurativa de los Estados.
- b. Establece claramente cuáles son las restricciones constitucionales, y las tiene por satisfechas en el caso, como lo es la temporalidad y la postulación por el mismo partido político o coalición.
- c. En conclusión, tiene que la elección consecutiva por diverso municipio en zona conurbada de Guadalajara, es válida, lo que es inconcuso, que, tanto para la Corte, como para la Sala Superior, la finalidad intrínseca de la rendición de cuentas y el vínculo con la ciudadanía, es decir, el voto en sus dos dimensiones está garantizado.

Así pues, de todo lo expuesto, se puede arribar a la misma conclusión de la Sala Regional Monterrey<sup>42</sup>, donde establece que una condición que debe cumplir alguien que pretenda ser votada vía reelección, es que participe o sea postulada por el mismo distrito por el que fue electa y ejerce el cargo, porque ello define y concreta un elemento esencial, configurativo de la reelección, que la ciudadanía del ámbito territorial en el cual el funcionariado ejerció el encargo, tenga la posibilidad de evaluar su gestión y esté en aptitud de ejercer un voto libre e informado.

Siguiendo esa directriz, la condición de postulación por el mismo distrito debe entenderse referida al mismo territorio o un territorio que incluya, necesariamente, la posibilidad de que los electores que votaron y permitieron el acceso al cargo, tengan la opción de refrendar o rechazar ese apoyo.

Esta interpretación garantiza la posibilidad de que las diputaciones puedan resultar funcionales en la lógica del sistema partidista, sin afectar el derecho colectivo de la ciudadanía de participar en la ratificación o rechazo de una diputación previamente electa que busca su elección consecutiva.

El estudio de la reelección, al ser un tema novedoso, propone nuevas perspectivas de análisis, la Sala Superior, Sala Monterrey y la propia Corte, han manifestado que la reelección convive como una manera de realizar el derecho a ser votado, y que, por lo tanto, al ejercerse en un sistema donde deben igualmente respetarse otros, concluye que los derechos deben convivir y no excluirse unos a otros, en beneficio de la democracia y de la sociedad.

En virtud de lo anterior, y del análisis expuesto, se tiene que son infundados los agravios que exponen los actores, y para el caso concreto, la postulación de los candidatos C. Patricia García García, por el distrito XV; C. Luis Enrique García López, por el distrito XVII; y la C. Gladys Adriana Ramírez Aguilar, por el distrito XI; por vía reelección por distrito diverso al que obtuvieron el triunfo en la elección inmediata anterior, permite plenamente la identificación de los candidatos, la posibilidad de rendición de cuentas y con base a ello, queda intocado, y no se violenta en modo alguno el derecho a un voto informado y a



<sup>42</sup> SM-JRC-32/2021

la convivencia de todos los derechos y principios que confluyen en un ejercicio democrático como lo es un proceso electoral.

Esto, es incluso acorde con lo resuelto por la Sala Superior en el asunto SUP-REC-59/2019, que estableció que "con la reelección es posible premiar o castigar a un legislador mediante el sufragio, máxime si se tiene en consideración que si la elección consecutiva se da en el mismo distrito electoral o en algún distrito del mismo municipio [...], está garantizada la posibilidad de evaluar la gestión de los servidores públicos para efecto de la reelección o no, para de ahí ratificar o no al legislador.

De igual manera, en el SUP-JDC-10257/2020 Y ACUMULADOS, se indica que el derecho a ser votado no es un derecho absoluto. Dicho derecho implica dos dimensiones, una individual y una social a partir de la existencia de un vínculo necesario entre representantes y representados, y que la naturaleza jurídica de la reelección, o elección consecutiva, supone, salvo previsión expresa en contrario, una condición implícita que se traduce en la posibilidad de limitar la reelección al mismo ámbito territorial, distrito o circunscripción, sin que ello, por sí mismo, implique una vulneración al derecho a ser votado.

Congruente también con la Opinión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre que el artículo 202 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla es constitucional, ya que el requisito para que los diputados que busquen la reelección, consistente en que sólo puedan ser postulados en el mismo distrito electoral, no vulnera el derecho a ser votado, dado que con la reelección es posible premiar o castigar a un legislador mediante el sufragio, máxime si se tiene en consideración que si la elección consecutiva se da en el mismo distrito electoral o en alguno del mismo municipio o delegación, garantiza la posibilidad de evaluar la gestión de los servidores públicos para efecto de la reelección o no.

En consecuencia, este Tribunal Local determina, que el artículo 156 A, fracción V del Código Electoral, resulta apegado al orden constitucional, al establecer reglamentación válida acorde a los fines de la reelección en relación a la realidad política, social, económica, poblacional y geográfica de Aguascalientes.

Lo anterior, en el entendido de que no transgrede la rendición de cuentas, tal y como quedó estudiado en el cuerpo de la presente sentencia, por lo que no procede su inaplicación.

**7.11. VIOLACIÓN A LA PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL QUE AMPARA EL PRINCIPIO "NINGÚN LEGISLADOR DEBE LEGISLAR EN SU PROPIO BENEFICIO"**. Los promoventes, señalan que la reforma del pasado 29 de junio, fue propuesta y aprobada por los propios legisladores que ahora son candidatos por reelección a una diputación.

Los promoventes, refieren el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, como fundamento de su pretensión, por lo que transcriben párrafos en donde a la letra dice: "se propone" en lo relativo a las reformas en materia de reelección, que estas fueran aplicables a partir de la segunda



legislatura inmediata posterior. Tal propuesta se adoptó en el DECIMOTERCERO de la reforma constitucional de 2014.

Bajo esa lógica, los promoventes sostienen que, la reforma al artículo 156 A, fracción V, del Código Electoral, viola la *"prohibición constitucional consistente en el principio de que ningún legislador debe legislar en su propio beneficio"*. Lo anterior sin indicar en qué parte de la Constitución Federal se exige a los legisladores sustraerse a los efectos de una ley que hayan votado y aprobado.

Tampoco refiere -ni esta autoridad los advierte- algún articulado que condicione la entrada en vigor de la norma que se cuestiona en este asunto. Por el contrario, se tiene que el transitorio referido producto de la reforma constitucional que introduce la reelección, fue debidamente respetado por los legisladores que armonizaron la legislación local con la nueva redacción del artículo 116 fracción II, párrafo segundo.

En tal sentido, los actores dicen que la configuración de la reelección en la reforma al código electoral, es inconstitucional, -pues insisten-, se legisló en su propio beneficio, porque les abre la posibilidad de ser reelectos por distrito diverso al que fueron originalmente designados.

En esa tónica, ese transitorio, debería ser aplicado cada vez que exista una modulación o adaptación del derecho de reelección, lo cual, es dar un alcance, que indebidamente pretende darse a ese artículo transitorio.

39

En principio, este Tribunal considera que las manifestaciones vertidas por los actores, constituyen enunciados carentes de razonamientos lógico-jurídicos tendientes a desvirtuar los argumentos y conclusiones esgrimidos en la resolución de la autoridad responsable, pues de manera limitada señala una presunta "violación al principio constitucional", sin referir en que parte o articulado de la CPEUM se encuentra o de qué manera la reforma de referencia es contraria a lo dispuesto en la Carta Magna en cuanto al proceso de creación de normas.

Por esta razón, se estiman **inoperantes**, pues no basta la simple expresión de manifestaciones generales y abstractas, sino que es necesario precisar la manera en que se actualizan los perjuicios a que se refiere y explicar las consecuencias que, en su caso, se hayan producido, acorde con lo señalado por la Suprema Corte en la Jurisprudencia de rubro **AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL RECURRENTE SOLO MANIFIESTA QUE LA SENTENCIA IMPUGNADA VIOLA DIVERSOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES O LEGALES Y LOS TRANSCRIBE**<sup>43</sup>.

En el caso, los recurrentes solo hacen mención a la violación de principio constitucional, sin exponer qué artículo transgrede o en que norma se sitúa dicho principio, pues solamente refiere una propuesta contenida en un dictamen, de tal forma que no es posible determinar cómo es que las candidatas y el

<sup>43</sup> Jurisprudencia 2a. XXXII/2016 (10a.), de rubro **AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL RECURRENTE SÓLO MANIFIESTA QUE LA SENTENCIA IMPUGNADA VIOLA DIVERSOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES O LEGALES Y LOS TRANSCRIBE**. Disponible para consulta en la URL: <https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2011952&Clase=DetalleTesisBL&Semanao=0>

candidato involucrados, en el acto reclamado, vulneran preceptos constitucionales, para que, con base en su planteamiento, este Tribunal pudiera analizar si efectivamente se violentaron o no.

Además, los planteamientos que hacen valer, carecen de fundamento legal en función de los siguientes razonamientos:

Se debe entender que los diputados, son parte de un órgano colegiado<sup>44</sup> cuya función por excelencia es la creación, reforma y modificación de leyes, según se desprende del artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes en la que establece las facultades del poder legislativo destacando que:

*"ARTÍCULO 8º. - Son facultades del Congreso del Estado las siguientes:*

*I. Aprobar y expedir normas de observancia general y obligatoria en el Estado de Aguascalientes, con el carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos, en las materias de su competencia determinadas en la Constitución Federal, la Constitución del Estado y las leyes que de ambas emanen;"*

De esta manera, la reforma legal de la que pretenden dolerse los promoventes, es producto del proceso creador de normas, es decir, es una reforma realizada de conformidad con los artículos 29 al 35 de la Constitución Local, en concordancia con los artículos 103 al 137 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, consagran el proceso de creación de normas.

Luego entonces, tenemos que el proceso de creación de una ley, comienza con la presentación de iniciativas de reforma o de creación de leyes que se establece en el artículo 103 de la misma Ley Orgánica:

*"ARTÍCULO 103.- El proceso legislativo empieza con la iniciativa y concluye con una resolución emitida por el Pleno, que en caso de ser aprobatoria deberá publicarse en los términos de esta Ley."*

En ese sentido, tenemos que la iniciativa que dio origen a la reforma de la que ahora buscan inconformarse fue presentada por la Comisión de Elecciones, según se desprende del Dictamen rendido el día quince de junio del año 2020<sup>45</sup>, de lo cual se tiene que la iniciativa fue sometida a deliberación tanto de mayorías como de minorías políticas.

En el referido dictamen, consta que los integrantes de la Comisión de Elecciones son diputadas y diputados distintos a los que en el caso se pretende anular el registro como candidatos por reelección.

Ante esta situación, es posible advertir que los promoventes parten de una interpretación en su favor señalando que los candidatos que buscan contender por un distrito diverso al que fueron electos originalmente, son los mismos que promovieron la reforma que moduló las reglas de reelección. Sin

<sup>44</sup> Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes. Artículo 3º El ejercicio del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes se deposita en una Asamblea denominada Congreso del Estado, que procurará un orden público, justo y eficaz, a través de leyes y decretos en el ámbito de su competencia, conciliando y sumando los distintos intereses legítimos de la sociedad. Este Poder se regirá bajo los principios del modelo de parlamento abierto, por lo que deberá implementar mecanismos que garanticen la transparencia, la máxima publicidad, el derecho de acceso a la información, la apertura gubernamental, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

<sup>45</sup> Consultable en la URL: [http://congresoags.gob.mx/agenda\\_legislativa/descargar\\_pdf/1521](http://congresoags.gob.mx/agenda_legislativa/descargar_pdf/1521)



embargo, la iniciativa de reforma al artículo 156 A, fue presentada por 19 de los 27 diputados, la cual fue aprobada por mayoría del pleno, y fue discutida en la sesión del pleno del día quince de junio del dos mil veinte.

Es oportuno precisar que, en el dictamen referido, se observan diversas iniciativas de reformas en donde se observa que se discutieron, entre otras propuestas, varias reformas al Código electoral, que pretendieron perfeccionar temas como una mejor representación de la mujer en la vida pública, el régimen de financiamiento de los partidos, la reelección de diputados, violencia política en contra de las mujeres por razón de género, entre otras.

Así, siguiendo el proceso legislativo, una vez presentado el dictamen por la comisión de asuntos electorales, de conformidad con el artículo 113, se da lectura integral a efecto de que el Pleno tenga conocimiento del contenido, y una vez concluida, se delibera para, en caso de así considerarlo, aprobar mediante votación.

Para tal efecto, se prevé que la aprobación será por mayoría o por unanimidad, lo que implica que en ninguna manera la voluntad simple de los tres candidatos objeto de este recurso, baste para la efectividad de una reforma, es decir, no fue determinación propia de las y el candidato, sino que en función colegiada se votó y aprobó por el Pleno del Congreso Local.

De tal suerte que, el planteamiento que los promoventes hacen en cuanto a que los candidatos legislaron en su favor, es impreciso y carente de fundamento, pues parte de un supuesto creado por los actores. De tal suerte que, de la norma que modula un presupuesto en la lógica de la instrumentación de la reelección, en forma de reglas generales abstractas e impersonales, que no implican un beneficio, no son contrarios al transitorio DECIMOTERCERO de la reforma de 2014.

Así, tenemos que los actores confunden el contenido del referido artículo transitorio, toda vez que, la actuación de los legisladores no transgrede, pues la no implementación inmediata o la postergación de la entrada en vigor de la posibilidad de reelección en la reforma de 2014, tuvo que ordenarse **ESPECÍFICAMENTE** en un artículo transitorio, o sea, de no haberse estipulado así, la posibilidad de la reelección hubiera sido posible a partir de la publicación de la reforma, en tal sentido no es posible sostener que estas modificaciones *per se* tenían que esperar un tiempo para su implementación.

En este sentido, la función legislativa obliga a los integrantes del Congreso a crear o reformar normas en aras de un beneficio general, lo que implica que el proceso de reforma al que se sometió el Código Electoral tuvo como finalidad, regular cuestiones de orden público y observancia general de conformidad con el artículo 1° del propio ordenamiento local, y su perfeccionamiento se endereza no para beneficio de quien legisla, sino para el fortalecimiento de la función legislativa que, como ya se dijo, no debe perseguir otra cosa, más que el bien común.



Así pues, haciendo una *reducción al absurdo*<sup>46</sup>, llegaríamos a la conclusión de que los legisladores no podrían hacer leyes, o bien que deberían estar en una categoría o ceñirse a un régimen o fuero especial -cuestión prohibida por la propia Constitución-, pues de una u otra manera, cada norma, ley, reforma o derogación que fuese de observancia general para toda la población de Aguascalientes, redundaría en un beneficio en favor de los legisladores.

Luego, tenemos que señalar directamente que los ahora candidatos tuvieron la intención de beneficiarse, resulta carente de lógica y razonabilidad, pues es materialmente imposible conocer la intencionalidad de los legisladores, máxime que su deber como servidores públicos es velar por los intereses comunes, y no los particulares.

En ese sentido, es oportuno precisar que, para acceder a la postulación de candidaturas, la Constitución Federal en los artículos 41, 35 y 53, establece que los partidos políticos tienen la obligación de la postulación de candidaturas, sin que se pierda de vista que la finalidad no es solo la postulación igualitaria por razón de géneros, sino la representación política en igualdad de circunstancias.

Visto desde tal perspectiva, los partidos en su libertad de autoorganización y autodeterminación, las estrategias políticas de cada partido, constituyen meras modulaciones tendentes a la obtención de cargos de elección popular.

Así, la postulación a una candidatura por vía partidista, no es un proceso o una decisión propia de un ciudadano que busca un cargo de elección popular, sino que, se insiste, en que la definición de los procedimientos y requisitos para la selección de candidaturas, así como los procesos deliberativos para la definición de estrategias políticas y electorales es propia de los partidos políticos, en los términos de su ideología e intereses políticos, lo que implica una atribución para definir a las personas que cumplirán de mejor manera con su planes y programas.

En efecto, dicha medida no se considera violatoria de los criterios de proporcionalidad y razonabilidad ni de los principios de equidad, igualdad, certeza, legalidad y objetividad electorales, ya que esta legislación aplicaría, en igualdad de circunstancias, a todos aquellos diputados que, en el ejercicio de su encargo, tengan la intención de reelegirse. Además, se trata de una regla clara y cierta que se aplicará a todos los servidores públicos de elección popular que se encuentren en la misma hipótesis, esto es, que pretendan reelegirse.

Considerarlo de otra manera abonaría a fomentar una parálisis legislativa, situación que no tiene cabida en un Estado democrático y de derecho, donde la deliberación parlamentaria es elemento esencial del procedimiento legislativo, en tanto que son los diputados en su calidad de representantes de los ciudadanos los que toman las decisiones colectivas después de haber tenido la oportunidad de participar en un debate abierto a todos, en el que se hayan equilibrado las razones a favor y en contra de las diversas propuestas que se pongan a su consideración.

<sup>46</sup> La Reducción al Absurdo como Argumento Jurídico. JOAQUÍN RODRÍGUEZ- TOUBES MUÑOZ, Universidad de Santiago de Compostela.





Es decir, el principio de la deliberación parlamentaria está estrechamente vinculado con los principios democráticos, por ser parte de un sistema de adopción de decisiones públicas en contextos singularizados por el pluralismo político.

Por lo tanto, el planteamiento aducido de una violación al "principio" de legislar e beneficio propio, es infundado e inoperante.

Por lo anterior, al haber resultado infundados e inoperantes los agravios hechos valer por los actores, lo procedente es confirmar las resoluciones controvertidas, por las razones aquí expuestas.

Por lo expuesto y fundado se:

8. RESUELVE:

PRIMERO: Se acumulan los recursos de apelación TEEA-RAP-015/2021; TEEA-RAP-016/2021; TEEA-RAP-017/2021; TEEA-RAP-018/2021; TEEA-RAP-019/2021; TEEA-RAP-020/2021; TEEA-RAP-021/2021; TEEA-RAP-022/2021 al diverso TEEA-RAP-014/2021. En consecuencia, glóse se copia certificada de los puntos resolutivos de esta resolución a los juicios acumulados.

SEGUNDO: Se confirman las resoluciones controvertidas CG-R-38/2021; CG-R-39/2021 y CG-R-40/2021, emitidas por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral.

NOTIFÍQUESE. Como en derecho proceda y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, por unanimidad de votos de las Magistradas y Magistrado que lo integran, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

MAGISTRADA PRESIDENTA

CLAUDIA ELOISA DÍAZ DE LEÓN GONZÁLEZ

MAGISTRADA

LAURA HORTENSIA  
LLAMAS HERNÁNDEZ

MAGISTRADO

HÉCTOR SALVADOR  
HERNÁNDEZ GALLEGOS

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

  
JESÚS OCIEL BAENA SUCEDO

El que suscribe, Néstor Enrique Rivera López, Secretario de Estudio del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, adscrito a la ponencia de la Magistrada Claudia Eloisa Díaz de León González, con fundamento en lo previsto por los artículos 360, fracción V del Código Electoral del Estado de Aguascalientes y 32, fracción XIX del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado-----

----- **C E R T I F I C A** -----

QUE EL PRESENTE LEGAJO CONSTA DE VEINTIDOS (22) HOJAS ÚTILES POR AMBOS LADOS Y QUE CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE OBRA DENTRO DEL EXPEDIENTE TEEA-RAP-014/2021 Y ACUMULADOS. -----

-----SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EL DÍA VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DEL AÑO (2021), EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, CAPITAL DEL ESTADO DEL MISMO NOMBRE. *DOY FE.* -

**Conste.** -----

**Lic. Néstor Enrique Rivera López**

**Secretario de Estudio.**